DOCUMENTO DE TRABAJO

Área de Transcripciones

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2024

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO
23.^a SESIÓN ORDINARIA
(Matutina)
(Semipresencial)

MARTES 10 DE JUNIO DE 2025
PRESIDENCIA DEL SEÑOR FERNANDO ROSPIGLIOSI CAPURRO

—A las 10:15 h, se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, buenos días.

Siendo las diez horas y cinco minutos del martes 10 de junio de 2025, se va a pasar lista para verificar el cuórum.

Sírvanse los señores congresistas responder "presente" al llamado de sus apellidos que realizará la secretaria técnica.

Proceda, señora secretaria técnica.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista:

Muy buenos días con todos, señores congresistas.

Con su venia, señor presidente, procedo con el llamado a asistencia.

Con su venia, señor presidente.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, presente.

Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aragón Carreño, presente.

Camones Soriano (); Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco (); Aguinaga Recuenco (); Juárez Gallegos (); Juárez Gallegos (); Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, presente.

Alegría García (); Alegría García (); Lizarzaburu Lizarzaburu (); Lizarzaburu Lizarzaburu (); Elías Avalos.

El congresista Elías Avalos manifiesta su asistencia por el chat de la plataforma. Elías Avalos, presente.

Se da cuenta de la licencia presentada por la congresista Calle Lobatón. Calle Lobatón, con licencia.

Juárez Gallegos (); Juárez Gallegos (); Luna Gálvez (); Luna Gálvez (); Cerrón Rojas (); Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Cerrón Rojas, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cerrón Rojas, presente.

Se da cuenta de la licencia del congresista Balcázar Zelada.

Balcázar Zelada, con licencia.

Mita Alanoca (); Mita Alanoca (); Muñante Barrios (); Muñante Barrios (); Herrera Medina (); Herrera Medina (); Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, presente.

Paredes Gonzales (); Paredes Gonzales ().

Se da cuenta de la asistencia de la congresista Herrera Medina a través del chat de la plataforma.

Herrera Medina, presente.

Paredes Gonzales ().

Del mismo modo, se da cuenta de la asistencia de la congresista Juárez Calle a través del chat de la plataforma.

Juárez Calle, presente.

Quiroz Barboza (); Quiroz Barboza (); Williams Zapata (); Williams Zapata ().

Se da cuenta de la dispensa presentada por la congresista Tudela Gutiérrez.

Tudela Gutiérrez, con dispensa.

Cavero Alva (); Cavero Alva (); Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cutipa Ccama, presente.

Valer Pinto (); Valer Pinto (); Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, presente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Flores Ramírez (); Flores Ramírez.

El congresista Flores Ramírez manifiesta su asistencia a través del chat de la plataforma. Flores Ramírez, presente.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ RAMOS VDA. DE NÚÑEZ (HYD).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Echaíz de Núñez Izaga, presente.

Luque Ibarra (); Luque Ibarra ().

Segundo llamado de los congresistas titulares de la comisión:

Camones Soriano ().

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Muñante, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Muñante Barrios, presente.

Aguinaga Recuenco (); Juárez Gallegos (); Alegría García.

El señor ALEGRÍA GARCÍA (FP).— Alegría, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Alegría García, presente.

Lizarzaburu Lizarzaburu (); Luna Gálvez (); Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Mita Alanoca, presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, presente.

Paredes Gonzales (); Quiroz Barboza (); Williams Zapata (); Cavero Alva (); Valer Pinto (); Luque Ibarra.

Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no respondieron al llamado o que se encuentren con licencia:

Alva Prieto (); Ventura Angel (); Barbarán Reyes (); Bustamante Donayre (); Castillo Rivas (); Chacón Trujillo (); Flores Ruíz (); Jiménez Heredia.

El señor FLORES RUÍZ (FP).— Flores Ruíz, presente.

Flores Ruíz, presente. Buenos días.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Buenos días, congresista.

Flores Ruíz, presente.

El congresista Álex Paredes manifiesta su asistencia a través del chat de la plataforma.

Paredes Gonzales, presente.

López Morales (); Obando Morgan (); Revilla Villanueva (); Alva Prieto (); Espinoza Vargas (); Tello Montes (); Bellido Ugarte (); Cruz Mamani (); Montalvo Cubas (); Gutiérrez Ticona ();

DOCUMENTO DE TRABAJO

Tacuri Valdivia (); Amuruz Dulanto, Jeri Oré (); Cordero Jon Tay, Luis (); Azurín Loayza.

El señor AZURÍN LOAYZA (SP).— Presente.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Azurín Loayza, en reemplazo del congresista Valer Pinto.

Reymundo Mercado ().

Señor presidente, habiendo culminado con el llamado de asistencia de los señores congresistas, se tiene registrado a 18 congresistas presentes.

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Señora secretaria, muy buenos días. Por favor, considerar mi asistencia, congresista Chacón por el congresista Aguinaga.

Gracias.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Se tiene consignada la asistencia de la congresista Chacón Trujillo en reemplazo del congresista Aguinaga Recuenco.

Chacón Trujillo, presente.

Con dicha consignación de asistencia, se tiene registrado a 19 congresistas presentes, tres con licencia.

El cuórum reglamentario para la presente sesión es de 14 congresistas.

Señor presidente, usted cuenta con el cuórum de reglamento para dar inicio a la presente sesión.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Con el quórum de reglamento, y siendo las diez con quince minutos del martes 10 de junio de 2025, reunidos de manera presencial en el Hemiciclo del Congreso y de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, se da inicio a la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Aprobación del Acta

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, ha sido remitida a su despacho, junto con la citación a la presente sesión, el Acta de la vigésima segunda sesión ordinaria de la Comisión, realizada el martes 3 de junio de 2025.

Si no hay ninguna observación, se dará por aprobada.

El Acta ha sido aprobada.

DESPACHO

El señor PRESIDENTE.— Los documentos recibidos y remitidos han sido enviados a su despacho junto con la citación.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Si algún congresista desea copia de alguno de ellos, lo puede solicitar al personal de la Comisión.

Informes

El señor PRESIDENTE.— Si algún congresista desea realizar algún informe, puede solicitar el uso de la palabra.

No habiendo informes, pasamos a la sección de pedidos.

Pedidos

El señor PRESIDENTE.— Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, puede hacerlo en estos momentos.

No habiendo pedidos, pasamos a la Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

El señor PRESIDENTE.— Como primer punto de agenda, tenemos debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 10747/2024-CR, que propone la ley que modifica la Ley 30647, Ley que precisa el régimen laboral del Congreso de la República, del Banco Central de Reserva del Perú y de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administraciones Privadas de Fondos de Pensiones y sus trabajadores.

La presente propuesta legislativa tiene como finalidad precisa y puntual excluir del ámbito de la Ley Servir a los servidores del Tribunal Constitucional, modificando para ello la Ley 30647.

Esta iniciativa responde a razones de fondo vinculadas a la naturaleza constitucional, funcional y organizacional del Tribunal Constitucional, así como a la necesidad de preservar su autonomía e independencia, pilares fundamentales para la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho en nuestro país, conforme paso a detallar a continuación.

Respecto a su naturaleza constitucional y autonomía, el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de control y defensa de la Constitución, dotado de autonomía funcional y administrativa, tal como lo establece el artículo 201 de la Constitución Política. Esta autonomía independiente es indispensable para garantizar que sus decisiones y funcionamiento estén libres de cualquier injerencia de otro poder del Estado. Incluir a sus servidores bajo el régimen de la Ley Servir, que depende del Poder Ejecutivo a través de Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas, implica una afectación directa a esta autonomía, pues somete aspectos claves de su gestión interna a entidades ajenas a su mandato constitucional.

En cuanto a la especialización y la carrera profesional en el Tribunal Constitucional, el trabajo en el TC requiere una altísima especialización, particularmente en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Fundamentales.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La experiencia y la formación continua de sus servidores no pueden equipararse a los estándares generales del servicio civil, pues la labor que desempeñan es única y de altísima sensibilidad jurídica e institucional. La aplicación de los criterios de clasificación y evaluación de la Ley Servir podría desnaturalizar la carrera profesional dentro del Tribunal, afectando la calidad y continuidad de sus servicios. Salvaguardar un régimen laboral propio es, por tanto, indispensable para asegurar la idoneidad y especialización de quienes están en la institución.

La exclusión que propone el predictamen está en consonancia con el tratamiento especial que tienen otros órganos constitucionalmente autónomos, como el Congreso de la República, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, quienes se encuentran fuera del ámbito de la Ley Servir. Es decir, existe un precedente normativo claro que reconoce la necesidad de un régimen diferenciado para entidades cuya función y naturaleza exigen independencia absoluta respecto de la administración pública ordinaria.

Al respecto, cabe precisar que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Expediente 0025-2013-PI/TC, reconoce la posibilidad de establecer excepciones al ámbito de la Ley Servir, siempre que estén razonablemente fundadas en la especial naturaleza y en las particularidades de la prestación de servicio, lo que en el presente caso cumple ambas condiciones. Asimismo, y a fin de evitar cualquier tipo de contradicción normativa, la propuesta incluye una disposición complementaria derogatoria, a fin de disponer que queda derogada toda disposición que se oponga a la presente ley, asegurando así la coherencia y claridad del marco legal aplicable al Tribunal Constitucional y sus trabajadores.

En síntesis, el impacto normativo de la presente propuesta se describe al modificar la Ley 30647, el título y **(3)** el artículo único, incluyéndose al Tribunal Constitucional y sus trabajadores dentro de sus alcances, disponiendo que se rigen por el régimen laboral de la actividad privada y no están comprendidos dentro de los alcances de las normas que regulan la gestión de recursos humanos del servicio civil.

Se excluye al Tribunal Constitucional y sus trabajadores de la Ley 30057. Así, las disposiciones referidas al ámbito de Servir no serán aplicables al Tribunal Constitucional.

En suma, aprobar esta propuesta es una medida necesaria para salvaguardar la autonomía, la especialización y el funcionamiento independiente del Tribunal Constitucional, en concordancia con el marco constitucional, jurisprudencial y legal vigente. Garantizar la independencia de este órgano es garantizar la defensa de la Constitución y la estabilidad democrática de nuestro país.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Habiendo culminado con la sustentación, abro el debate para recibir los comentarios y opiniones de los señores congresistas.

Damos la bienvenida a los congresistas Lizarzaburu, Luque y Montoya.

No habiendo intervenciones, se pone al voto el predictamen recaído en el Proyecto 10747/2024-CR, que propone la ley que modifica la Ley 30647, ley que precisa el régimen laboral del Congreso de la República, del Banco Central de Reserva del Perú, y de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, y sus trabajadores.

Señora secretaria técnica, proceda a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal:

Con su venia, señor presidente.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, a favor.

Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aragón Carreño, a favor.

Camones Soriano (); Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco (); Aguinaga Recuenco (); Juárez Gallegos (); Juárez Gallegos (); Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Presente. A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, a favor.

Alegría García (); Alegría García (); Lizarzaburu Lizarzaburu.

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Lizarzaburu Lizarzaburu, a favor.

Elías Ávalos (); Elías Ávalos.

El congresista Elías Ávalos, manifiesta su voto, a favor, a través del chat de la plataforma.

Elías Ávalos, a favor.

Juárez Calle...

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Chacón Trujillo, a favor. Buenos días. Chacón Trujillo, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Chacón Trujillo, a favor, por el congresista Alejandro Aguinaga.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Juárez Calle.

La congresista Juárez Calle, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma. Juárez Calle, a favor.

Luna Gálvez (); Luna Gálvez () .

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Elías, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Ya se consignó su voto a favor, congresista Elías Ávalos, a través de la plataforma y ratificada en este momento de manera oral.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— Gracias, doctora.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cerrón Rojas.

El señor CERRÓN ROJAS (PL).— Cerrón Rojas, a favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Cerrón Rojas, a favor.

Mita Alanoca...

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Muñante, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Muñante Barrios, a favor.

Mita Alanoca (); Mita Alanoca (); Herrera Medina () .

El señor MITA ALANOCA (PL).— A favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, a favor.

Muñante Barrios () .

La congresista Herrera Medina, manifiesta su voto, a favor, a través del chat de la plataforma.

Herrera Medina, a favor.

Soto Palacios (); Soto Palacios (); Paredes Gonzales (); Paredes Gonzales (); Quiroz Barboza.

El señor QUIROZ BARBOZA (BM).— Buenos días, Quiroz Barboza, a favor. Considerar mi asistencia, por favor, presidente.

Muchas gracias.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Quiroz Barboza, a favor.

Williams Zapata...

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Soto Palacios, a favor, también. Soto Palacios, a favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, a favor.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— A favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.— Williams Zapata, a favor.

Cavero Alva (); Cavero Alva (); Cutipa Ccama.

DOCUMENTO DE TRABAJO

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP)..- A favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.- Cutipa Ccama, a favor.

Valer Pinto (); Valer Pinto (); Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP)..- Morante Figari, a favor.

Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS)..- Flores Ramírez, a favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.- Flores Ramírez, a favor.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ RAMOS VDA. DE NÚÑEZ (HYD)..- A favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.- Echaíz de Núñez Izaga, a favor.

Luque Ibarra.

La señora LUQUE IBARRA (BDP)..- Solicito consigne mi asistencia.
Mi voto en contra,

LA SECRETARIA TÉCNICA.- Luque Ibarra, en contra.

Segundo llamado a los congresistas titulares de la Comisión:

Camones Soriano (); Juárez Gallegos (); Alegría García (); Luna Gálvez (); Paredes Gonzales.

El señor PAREDES GONZALES (BM)..- A favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.- Paredes Gonzales, a favor.

Cavero Alva (); Valer Pinto () .

Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han respondido al llamado:

Alva Prieto (); Ventura Angel (); Barbarán Reyes (); Bustamante Donayre (); Castillo Rivas (); Flores Ruíz.

El congresista Flores Ruíz manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma, consignando su voto a favor en reemplazo de la congresista Juárez Gallegos.

Flores Ruíz, a favor.

Jiménez Heredia (); López Morales (); Obando Morgan (); Revilla Villanueva (); Espinoza Vargas (); Tello Montes (); Bellido Ugarte (); Cruz Mamani (); Montalvo Cubas (); Amuruz Dulanto (); Jeri Oré (); Cordero Jon Tay (); Azurín Loayza.

El señor AZURÍN LOAYZA (SP)..- A favor.

LA SECRETARIA TÉCNICA.- Azurín Loayza, a favor, en reemplazo del congresista Valer Pinto.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Señor presidente, habiendo culminado con el llamado de sentido de votación de los señores congresistas, se tiene registrado 21 votos a favor, uno en contra, cero abstenciones.

El dictamen ha sido aprobado por mayoría.

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, conforme al registro de votos anunciado por la secretaria técnica, el dictamen ha sido aprobado por mayoría.

Damos la bienvenida a los congresistas Williams y Cueto.

Como segundo punto de agenda, tenemos debate y votación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, que propone la Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

En primer lugar, hay que dejar claro que la presente propuesta de ley de amnistía no implica ni representa ninguna impunidad, como se viene difundiendo en algunos sectores. Por el contrario, responde a un análisis riguroso y a la necesidad histórica, justa y humanitaria que busca reparar a quienes, con valentía y amor a la patria, defendieron el orden constitucional y la democracia en uno de los periodos más trágicos y dolorosos que ha atravesado nuestro país: el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Estos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa arriesgaron sus vidas para devolvernos la paz y la estabilidad. Muchos de ellos ya han fallecido; otros siguen envejeciendo en el olvido, perseguidos judicialmente durante décadas, y con sus familias cargando el peso del dolor y la incertidumbre.

Esta propuesta busca, entonces, que el Congreso, dentro de la facultad exclusiva y excluyente que le confiere el artículo 102, numeral 6, de la Constitución Política, corrija esta deuda histórica mediante el ejercicio legítimo del derecho a la amnistía.

Ahora paso a detallar las razones que justifican la aprobación de la presente propuesta de amnistía, que está dirigida estrictamente a dos supuestos.

Uno: a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los que hayan sido integrantes de los comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en los años 1980 a 2000.

Dos: a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, adultos mayores y a los integrantes del comité de autodefensa que cuenten

DOCUMENTO DE TRABAJO

con sentencia firme con calidad de cosa juzgada y/o en trámite de ejecución.

En ambos casos, se precisa que no aplica la amnistía para quienes se encuentran denunciados, imputados o condenados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios, los que deben ser objeto de los procesos penales correspondientes.

Uno de los argumentos que justifican la aprobación de esta ley se encuentra en el respeto al plazo razonable, el cual es un derecho consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, que establece el derecho a un debido proceso. Este principio es una garantía real, creada para proteger a las personas frente a la incertidumbre y a la afectación de derechos que genera un proceso penal indefinido.

El Tribunal Constitucional ha sido categórico al respecto. En la sentencia recaída en el Expediente 3509-2009-PHC/TC, señala que la violación al plazo razonable revoca la autorización del Estado para ejercer su poder punitivo, y que perseguir penalmente a una persona sin límites temporales vulnera el principio de proporcionalidad, afecta la dignidad humana y destruye la confianza en el sistema de justicia.

Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías – en realidad, son más de mil– procesados o investigados sin sentencia firme, muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias. Permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas.

Esta situación no es compatible con un Estado democrático que proclama los derechos fundamentales. El abuso del tiempo procesal se ha convertido en una forma de castigo sin sentencia, en una pena anticipada, injusta e inconstitucional.

En este contexto, la amnistía se presenta como una herramienta jurídica válida para restaurar el equilibrio quebrado, restituir el derecho al plazo razonable y poner fin a una persecución penal que ha dejado de ser compatible con la justicia.

Lo ha señalado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos similares: cuando el Estado no garantiza un proceso dentro de un tiempo razonable, la reparación no solo puede ser judicial, como en la *habeas corpus*, sino también legislativa, a través de mecanismos que restablezcan la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Por tanto, la presente propuesta es una respuesta proporcional, constitucional y legítima a una grave **(4)** omisión estructural del Estado.

No se trata de un perdón indiscriminado, sino de cerrar procesos que ya no pueden ni deben seguir abiertos porque el propio

DOCUMENTO DE TRABAJO

sistema judicial ha vulnerado los derechos de quienes debieron ser juzgados con celeridad y respeto a la legalidad.

En democracia, el uso del derecho penal no puede convertirse en venganza ni en castigo perpetuo.

El Congreso hoy tiene la oportunidad de restaurar el principio de justicia y cerrar un capítulo de injusticia.

Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad fueron incorporados a nuestro ordenamiento jurídico peruano después del año 2012, es decir, no estaban vigentes ni podían ser exigidos como norma interna durante el periodo 1980-2000, en que se sitúan los hechos materia de esta propuesta.

El principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 2, inciso 24-D de la Constitución y en los tratados internacionales, prohíbe la aplicación retroactiva de tipos penales, lo que ha sido ratificado expresamente por la Ley 32107, que dispone que los hechos anteriores al 1 de julio de 2002 se rigen por el régimen de prescripción del Código Penal.

Por tanto, calificar hoy, más de 20 años después, como delito de lesa humanidad hechos que en su momento no estaban definidos como tales, vulnera flagrantemente el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.

Ningún tratado obliga a los Estados a recalificar retroactivamente delitos comunes como crímenes de lesa humanidad.

La jurisprudencia internacional, si bien ha reconocido que ciertos crímenes son imprescriptibles, también ha reiterado que la retroactividad no puede imponerse sin que ello constituya una violación de los derechos fundamentales. Incluso la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece en su artículo 28 que un tratado no puede tener efectos retroactivos, salvo que lo disponga expresamente, lo cual no ocurre en ninguno de los tratados mencionados.

Por tanto, el Perú no incurre en responsabilidad internacional al aplicar su legislación penal interna conforme a la legalidad vigente en la época de los hechos.

En consecuencia, la finalidad de esta amnistía no es evadir la justicia, sino restituirla ahí donde el Estado la ha quebrado, por dilación excesiva, interpretación retroactiva o persecución ideologizada.

Por el contrario, constituye una decisión soberana y legalmente sustentada del Congreso para restablecer el equilibrio entre el deber del Estado de investigar y el derecho de los ciudadanos a no ser perseguidos eternamente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Finalmente, en cuanto a la amnistía a adultos mayores, se sustenta en un principio humanitario fundamental: la protección de la dignidad y de los derechos humanos de las personas en la etapa avanzada de su vida. A esta edad, las condiciones físicas y de salud suelen deteriorarse considerablemente, lo que hace desproporcionada y cruel la privación de la libertad, afectando su bienestar y calidad de vida.

En conclusión, ambos supuestos que contempla la presente propuesta de ley constituyen actos ajustados a derecho a la justicia y a las razones de humanidad que contribuyen a la reconciliación nacional y a la paz social.

Habiendo terminado la sustentación, se abre el debate y se da el uso de la palabra a los congresistas que lo soliciten.

Se da la bienvenida a los congresistas Muñante, Echaíz y Caverro.

El congresista Montoya, después Williams.

El señor MONTOYA MANRIQUE (HYD).— Señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Adelante, congresista Montoya.

El señor MONTOYA MANRIQUE (HYD).— Con su venia, señor presidente.

Buenos días a todos los presentes.

La ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado que se encuentran sin sentencia firme por caso vinculado a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000.

Señor presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, colegas que integran esta comisión, damas y caballeros: el presente proyecto de ley permitirá conceder amnistía aplicable en los casos por presuntos delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa, que no cuentan con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980-2000.

En esencia, esta proposición legislativa busca terminar con la persecución judicial que por décadas sufren quienes salieron a combatir el terrorismo. De este modo, se busca establecer un marco de garantía para quienes salieron en defensa del orden constitucional y el sistema democrático, quienes no pueden permanecer de por vida con la amenaza de la persecución penal o sometidos a investigaciones o procesos interminables, carentes de racionalidad y justicia.

Es necesario puntualizar que no serían aplicables los efectos de la presente ley a los denunciados o imputados por terrorismo, quienes deberán ser objeto de los procesos penales correspondientes de conformidad a la norma pertinente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Asimismo, el proyecto de ley busca garantizar el respeto de la cosa juzgada judicial, cuando en los procesos hayan alcanzado fallos judiciales con sentencia firme, donde los condenados por casos de violaciones de los derechos humanos deberán cumplir su respectiva sentencia.

En el caso de los adultos mayores, la fórmula legal propuesta concede amnistía de carácter humanitario en todos los casos por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980-2000, aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa, excepto a los condenados por delito de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública.

A continuación, quisiera exponer siete razones por las cuales el Proyecto de Ley 7549/2023-CR es constitucional y respeta el orden democrático:

- a) Respeta los fallos judiciales firmes.
- b) No se aplica a los denunciados ni condenados por corrupción.
- c) Se ampara en la sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente 02010-2020-PHC/TC, caso indulto Alberto Fujimori, donde se señaló la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la supervisión de cumplimiento de sentencias, por lo que se decide apartarse de lo señalado en la resolución emitida por la Corte, de fecha 7 de abril de 2022.
- e) El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída con la debida garantía dentro de un plazo razonable.
- f) El Tribunal Constitucional, en el Expediente 3509-2009-PHC/TC, señala que la violación del derecho al plazo razonable es un derecho público subjetivo de los ciudadanos. Cuando estos límites son superados en un caso concreto, queda revocada la autorización con que cuenta el Estado para perseguir penalmente, limita el poder estatal.
- g) No resultan aplicables al presente proyecto de ley los alcances del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, que fue aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa 27517; entró en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano el 1° de julio de 2002.
- h) No son aplicables las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que entraron en vigencia en el ordenamiento jurídico peruano a partir del 9 de noviembre de 2003.

Finalmente, presidente, debo concluir esta breve sustentación del proyecto de ley recordando que esta iniciativa es de profunda

DOCUMENTO DE TRABAJO

justicia para quienes, en su momento, salimos en defensa del orden constitucional a enfrentar a los delincuentes terroristas que amenazaban con arrebatarnos nuestra patria, y gracias a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, que ofrendaron su vida y su libertad, hoy podemos tener un país encaminado hacia el desarrollo y a la justicia social.

Algunos datos numéricos, señor presidente, que pueden mostrar la gravedad de la situación: tenemos 1,092 personal de las Fuerzas Armadas en calidad de investigación preliminar, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, recurso de nulidad, y solamente 38 con sentencias ejecutoriadas. Eso significa que la persecución está evidenciada con números de lo que está sucediendo: 38 con sentencias ejecutoriadas en más de 35 años, y el resto sigue siendo perseguido por la justicia torcida que tenemos en algunos casos.

Eso es todo, señor presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Williams.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— Gracias, presidente.

Yo también quiero referirme también al mismo sentido lo siguiente presidente, señores congresistas. Estos procesos judiciales datan de la década de los 80, específicamente, 83, 84 y 85. A la fecha ya han pasado 42 años y hay procesos judiciales que se han hecho después de los 30; otros continúan también siendo enjuiciadas las personas. Tienen larga duración y, obviamente, quienes estuvieron en estos procesos judiciales ya pasan de los 80 años, o están cerca de los 80 años.

Están siendo enjuiciados, presidente, militares, y ahí tenemos que considerar a los soldados. Hay una gran cantidad de soldados que también están siendo enjuiciados y que tenían en ese tiempo 19, 20, 21 años, porque el asunto es que, si se da un hecho, procesan a toda la patrulla y si hay dos patrullas, procesan a las dos o tres patrullas.

Inmediatamente, luego tienen que procesar a su comandante, a su capitán de compañía y luego a su comandante de batallón y así se llega al Estado Mayor y luego al comandante general. Por eso es que en el Ejército estamos sobre los 700 y pico, casi 800, y suma con Marina y Fuerza Aérea, el dato que acaba de decir el congresista Montoya.

Entonces, así es como se enjuicia y lo peor es que un militar, un policía —ah, perdón, decía que estaban también los soldados— y eso es gravísimo porque son muchachos que fueron a servir a la patria, a pelear contra el terrorismo, murieron, quedaron inválidos y ahora están enjuiciados. Yo los he visto; son

DOCUMENTO DE TRABAJO

personas que pasan de los 60 años, porque en ese tiempo tenían 19, 20, no tienen plata y viven lejos, y tienen que venir a Lima porque en Castro Castro o en Lurigancho se hacen los juicios orales y tienen que venir cada semana; llegan en el bus de frente al penal y luego vuelven a su tierra. No tienen dinero para los abogados; los ayudan, obviamente, de alguna forma, entonces, están pasando todo ese problema.

Están también metidos policías y están los civiles de los comités de autodefensa, que es también otro gran problema. Hay muchos civiles que lucharon junto con los militares en los comités de autodefensa, porque se organizaban las patrullas entre civiles y militares y se actuaba contra Sendero Luminoso, y muchos de ellos están enjuiciados y tuvieron también una participación importante. Murieron muchísimos civiles en esos tiempos; inclusive, el Estado les ha hecho ciertos reconocimientos, pero ¿cómo se defienden si no tienen abogados y están lejos? Algunos optan por no venir, pero si están señalados ahí y también los agarran cuando se van de un bus; los chapam porque están requisitoriados y adentro.

Entonces, son personas que han peleado contra Sendero Luminoso con lo que tenían. Después se les dio unas escopetas, pero antes tenían solamente lo que podían organizarse, y así pelean contra Sendero Luminoso. Entonces, es importante tener en cuenta esto, presidente.

Sendero Luminoso nos hubiera llevado al caos y yo creo que no debo —ya no debo— extenderme en eso porque sabemos hacia dónde hubiéramos terminado con Sendero Luminoso, porque lo que quería es claro y agarró a una sociedad y a un Estado no preparado para luchar con una amenaza de esa naturaleza.

Todos los militares, policías y soldados fueron enviados de diferentes lugares del país. Eran de la selva, eran de la costa y fueron a luchar a otros lugares donde no conocían inclusive ciertas situaciones, pero fueron porque tenían que servir a su nación y ahora están enjuiciados.

Es también importante hacer notar que muchos de ellos murieron, quedaron lisiados, todavía siguen en el Hospital Militar y fueron enjuiciados. Fueron enjuiciados por el delito de lesa humanidad. Eso ya lo vimos en el Congreso. Y nosotros no estábamos suscritos todavía dentro del convenio de la convención; para ser enjuiciados por lesa humanidad hubiera sido por homicidio calificado. Como que también es cierto que sí ha habido denuncias y sentencias por los excesos, pero por lesa humanidad. Y el Perú no estaba todavía, no tenía la legislación de lesa humanidad; hubiera sido omisión calificada. Sin embargo, se enjuició por lesa humanidad, se sigue enjuiciando y por eso es que siguen en las cárceles, porque el tipo de delito es mayor. Y mientras que, a los terroristas, pues no les ponen esa pena, tienen mucha menos

DOCUMENTO DE TRABAJO

cantidad de años y ellos ya han salido de cárcel antes que los militares que todavía siguen en cárceles.

Bien, esto, presidente, es lo que quiero citar de modo general.

Yo creo que es correcto lo que se tiene que hacer. Obviamente, tenemos que debatirlo aquí. Hay muchos que han muerto durante el proceso judicial de tanto tiempo. Y sí quiero precisar algo que también es importante, pero ya guarda relación con esto. Esta ley en absoluto me beneficia a mí.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Damos la bienvenida a la congresista Juárez y al congresista Soto.

Tiene la palabra el congresista Cueto.

El señor CUETO ASERVI (HYD).— Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, aparte de agregar y, obviamente, compartir las opiniones tanto del almirante Montoya como del general Williams. (5)

Yo solo quiero agregar que hay que considerar que los militares y policías no fueron a luchar contra el terrorismo porque se les dio la gana; fue una decisión de gobierno de esa época. Tenemos en Marina, por lo menos, el connotado caso del Frontón que ha sido siete veces abierto, cerrado o abierto, y ha generado que mucha de esta gente haya muerto en plenos juicios, abiertos, reabiertos, y eso realmente genera lo que siempre se dice: justicia que tarda tanto y procesos tan largos realmente no es justicia. Ya es hora de parar esto.

Yo sé que van, seguramente, a salir a decir que esto es un tema de impunidad, que hay temas donde los derechos humanos y la Comisión Interamericana, pero a mí, por lo menos en forma personal, he dicho varias veces que no considero que deberíamos salirnos de este tipo de organizaciones supranacionales que realmente no sirven para nada. Ya es tiempo de que pongamos un alto en estas persecuciones.

Todo lo que se ha hecho en este Congreso, y que muchas veces desgraciadamente la misma fiscalía y algunos jueces no hacen caso porque son prevaricadores, yo creo que nos toca no solamente en este caso aprobar este proyecto de ley, sino tomar conciencia de que esa gente que hoy... muchos han muerto siendo perseguidos; hay un gran número —ya dadas las cantidades, el almirante Montoya— que están siendo perseguidos. Todavía siguen esta persecución porque lo hacen a propósito.

Y nos tienen con el tema de la lesa humanidad, que si los crímenes de guerra, cuando todo eso ya hay explicaciones históricas al respecto, porque fue hecho cuando los famosos juicios de Núremberg, eran para cuando se encontrara al causante, se hiciera

DOCUMENTO DE TRABAJO

un proceso, que fueron procesos rápidos. Pero no, acá estamos acostumbrados, nos hemos malacostumbrado a permitir que jueces y, peor aún, ONG como esta famosa IDL, que se ha encargado de perseguir a militares y policías, a mantenerlos en juicio permanente en etapas que han durado años de años de años.

Yo personalmente he visto a muchos marinos que han sufrido este embate y siguen sufriendo el embate, muchos de ellos. Algunos han tenido que salir al extranjero, ya muertos en el extranjero, fuera de su familia con problemas. Y tenemos mucho personal, y mucho personal, sobre todo de bajo rango: soldados, grumetes, marineros que lucharon en su época y que hoy, a los sesenta, setenta, y los que ya pasaron a los 80, muertos en esta implacable persecución de estas famosas organizaciones pro derechos humanos que no nos han ayudado en nada.

Y así queremos pedirles, y les exigimos hoy a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que vayan a Patate, que vayan a Madre de Dios a luchar, a poner el pecho o a develar estos exabruptos que tienen muchos radicales, como lo que pasó después de que el señor Castillo trató de dar el golpe de Estado, y que hoy hay todo un equipo de la fiscalía que está permanentemente persiguiéndolos, y seguramente querrán perseguirlos por los próximos veinte o treinta años.

¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que estamos logrando con las fuerzas que salieron a defender este país, con toda la gente que se fajó por nosotros? Porque todos acá estamos tranquilos ahora porque hubo un grupo de peruanos que salimos —me incluyo porque yo estuve también en esa zona— y muchos de acá, inclusive hasta los comandos Chavín de Huántar, han sido perseguidos por este tipo de actitudes, estas ONG y estos pro derechos humanistas.

Es posible que tengamos a miles de militares y policías que están siendo perseguidos en juicios, mientras que tenemos a un gran número de los terroristas liberados, indemnizados. Claro, parte de esa indemnización se va a estas ONG, a estos famosos defensores de derechos humanos. Y eso no es justo.

¿Hasta cuándo vamos a permitir? Ya tenemos un Estado con diferentes gobiernos, porque esto viene de muchos gobiernos atrás, que han permitido que esta lucha desigual jurídica haya sido manejada por estas famosas ONG que hoy, por supuesto, se oponen a que salga finalmente el reglamento de la ley que hemos sacado en este Parlamento para que sean controladas, para que sean fiscalizadas, para que sean transparentes.

Entonces, señores, yo no soy miembro de la comisión, pero menciono que ya es tiempo de que el país, a través del Congreso —les guste o no les guste a muchos de los que se jactan de ser defensores de los derechos humanos—, piense primero en la gente que defendió este país, en la gente que está en este momento

DOCUMENTO DE TRABAJO

defendiéndonos ahora con la criminalidad. No solo los policías, porque ya entró la Fuerza Armada.

A muchos no les gusta. Tendrán sus razones. Pero lo cierto es que somos un grupo de peruanos que defendimos este país. Somos un grupo de peruanos que dimos la cara, y muchos murieron por ello. Y no es justo que aquellos que quedaron, inclusive lisiados, estén siendo y continúen siendo perseguidos.

Ya es hora de marcar un alto a esta persecución infame contra los miembros que salieron a defender la continuidad democrática de este país.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Azurín.

El señor AZURÍN LOAYZA (SP).— Gracias, presidente.

Quisiera solamente iniciar esto. Mientras venía acá, venía pensando qué es lo que voy a decir y recordar todo lo que me ha pasado.

Yo, a los veintiún años, estaba peleando en Ayacucho. Veintiún añitos. Ahora tengo ya casi sesenta y cinco años y solo recordar siento un sentimiento, pero, acá lo que no debemos olvidar es toda esa masacre de estos espíritus inmundos, que quieren que cambie nuestra forma de vida, que quisieron imponernos por la fuerza.

Yo tengo una cicatriz. Esa cicatriz, cada que la veo, yo me recuerdo. ¿Y sabe qué? Voy a morir con esa cicatriz, porque jamás voy a olvidar ver a la gente llorando, a mi madre llorando de rodillas y a estos miserables queriendo someter al país.

Literalmente, tengo que decirlo, porque es la única forma que puedo yo manifestar mi opinión: literalmente levanté cadáveres. ¿Se imagina un chico de veintiún años que nunca salió de Lima, salir a provincia y a pelear con estos miserables? Para mí era totalmente... el cambio fue brusco y cambió mi perspectiva de ver la vida.

Recuerdo que un día abrazó a mi promoción, Walter Rosales León. Le doy un abrazo, le digo —ahora su nombre lleva el complejo Aramburú en Surquillo—, le digo: "Promoción, cuídate", le doy un abrazo y al día siguiente lo matan en Huamanguilla.

Fuimos también a recoger a todos los heridos, y vi cómo la gente lloraba, se sangraba porque la policía había sido diezmada. Toda esa escena quedó grabada en mí, y como repito acá, no quiero exagerar. Todos queremos decir a todos la manera en que debemos vivir, pero hay mecanismos, hay formas de comunicarnos para decir: "Esto es", pero nada por la fuerza.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Somos peruanos que hemos luchado allá, señor presidente, y fue terrible, y te digo, fue terrible porque algunos que están ahora defendiendo a estos miserables terroristas ni siquiera tienen la edad para poder observar lo que yo viví. Y los que pasamos los sesenta, cincuenta años, sabemos lo que hemos vivido en este país.

Y muchos de estos jóvenes ideologizados, equivocados, viven del odio y quieren someter al país. Estamos acá para defender nuestro país y defender a esos policías, a esos militares que arriesgaron su vida. Dicen que no fue terrorismo. Era terrorismo, era un salvajismo de estos miserables. Repito, y que la gente lo sepa, haber levantado cadáveres literalmente; imagínense un chico de veintiún años pasar por todo eso.

Se fijan en, supuestamente, los abusos de la policía, pero ¿quién cometió el abuso? Fueron ellos. Por eso, repito esto: cada quien quiere decirle a cada uno cómo vivir. Hay manera de decirle cómo vivir en este mundo. Hay forma de comunicarnos, hay medios para poder decir las cosas. A veces la gente, estos ideologizados que tratan de cambiar ahora mismo en el Congreso, muchos de estos —yo lo voy a denominar así, señor presidente— espíritus inmundos, porque viven del odio, quieren imponernos una forma de vida ahora, de otra manera, de otro medio.

Pero digo: está bien, todos tenemos una opinión, todos tenemos algo, queremos lo mejor, pero no someter al país a la barbarie, que caiga en una anarquía. Pero hay maneras. Yo también estoy de acuerdo con muchos reclamos, pero hay formas, maldición, hay formas de hacerlo, no sometiendo al país a un caos, señor presidente.

Solamente, yo voy a votar a favor de esto porque tengo un sentimiento por la Policía y la Fuerza Armada. Señor presidente, he visto hasta niños descuartizados por estos miserables que los sometían si no actuaban con ellos.

Tenemos alguna congresista, a su hermana —y permítame, disculpe que lo diga—. Yo no entendía esa forma de actuar. Y solamente es un pensamiento de gente inhumana, señor presidente.

Y acá tenemos que nosotros apoyar eso. Y yo voy a apoyar por este poquito de ley, porque es justo y no se puede perseguir a tantos policías y a tantos militares durante largo tiempo. Gente más vieja que yo, de más de ochenta años. Es injusto cómo el sistema de justicia no puede mantenerse de esa forma. Y eso solamente ocurre en el país.

Muchísimas gracias, señor presidente. Y disculpe el momento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra la congresista Luque.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La señora LUQUE IBARRA (BDP).— Gracias, presidente.

Presidente, yo voy a exponer varios puntos de vista del lado de las víctimas, porque en este debate, presidente, no hay un debate igual. Aquí están representados, además, sectores que mantienen una posición para generar una ley de amnistía que no es humanidad, sino impunidad.

Y voy a hablar de algunos casos de mi región, presidente, porque hay casos que se han hablado y se han discutido, y con mucha facilidad se califica a la gente y se le dice terrorista, se le dice comunista, se le dice caviar, se hace un conjunto de apelativos, pero no se mira la otra cara y los efectos que tiene esta ley, que —como digo— para mí es una muestra de impunidad, y una muestra, además, de un conjunto de leyes que han venido dando.

La Ley 32107 no era una ley que precisamente evitaba —¿no es cierto?— garantizaba que se prescribieran los delitos de lesa humanidad. Hubo jueces que aplicaron su control de convencionalidad, y ahora salen con una propuesta de amnistía para que absolutamente todos, denunciados, investigados...

Y voy a mencionar un caso de mi región, que no sé si lo conocen, que es la Matanza de Cashahui. Cashahui es una comunidad campesina en la provincia de Chumbivilcas. En el año 1980, una patrulla del Ejército violó mujeres, uno de los casos más fuertes de mi región. Torturó campesinos. Ellos no eran terroristas, no eran senderistas. Esas mujeres fueron violadas. Yo me pregunto: ¿esas personas que están procesadas por violación sexual tienen derecho a la amnistía? ¿Hay derecho a la amnistía para aquellos malos miembros de las Fuerzas Armadas, Policiales, del Ejército, que han cometido atentados contra la integridad, la libertad sexual? ¿Les autorizaba matar y asesinar a gente de esa manera? A mí no me parece, presidente.

Porque también las víctimas, como la zona de Cashahui, de una comunidad campesina, también esperan justicia. Porque hasta ahora no hay justicia. Porque —en eso sí coincido— no hay justicia; más de treinta años y no hay una condena. Porque las personas que fueron condenadas están fugadas, están fugadas. Los principales autores están fugados.

Esas mujeres que fueron violadas eran mujeres campesinas quechua hablantes. Porque ese es el rostro de la mayoría de las víctimas. Gente de las poblaciones más humildes y no eran terroristas ni senderistas.

Otro caso: el caso del bachiller en Derecho Marcelino Valencia y un estudiante Zacarías Pazca. Fue torturado en la comisaría de Santo Tomás, enterrado vivo, sin ninguna razón, porque él fue a pedir y saber por qué razón estaba detenido en el año 1990. ¿Qué hizo la policía? Lo torturó.

DOCUMENTO DE TRABAJO

El autor principal está fugado. Fugó tres veces, tres veces de la cárcel, con ayuda de otros policías, y está en Argentina. Nunca se le pudo extraditar. ¿También este señor que está fugado tiene derecho a la amnistía? Perdonarle los delitos, y se justifica también, porque también sucedió entre 1980 y 2000. Entonces, ¿todo eso justifica, presidente?

Entonces, no es un tema de humanidad. En realidad, lo que se está haciendo es una ley de impunidad. Una ley en la cual quieren hablar de las familias. Se menciona aquí que tienen derecho a reconstruir. **(5)** Y yo me pregunto: ¿y las familias de las víctimas? ¿Las familias de las comunidades campesinas? ¿Las familias de las mujeres de la comunidad campesina de Cashahui no tienen derecho a justicia? ¿No tienen derecho a justicia? ¿No tienen derecho a que ese mal miembro del Ejército —que además ha sido identificado con nombre y apellido— no responda ante la justicia? ¿O es que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las Fuerzas del Orden avalan ese tipo de actos? ¿Se puede normalizar una situación así? ¿Se avala todo?

No. No es florero, congresista, discúlpeme. Eso es lo que en realidad enfrentan las víctimas. Y esta propuesta no tiene una relación con cómo se asegura justicia para las víctimas. Tiene un rostro y un nombre, pero no el de las víctimas, presidente.

Y abiertamente, y abiertamente en la propuesta no solamente se está hablando de una amnistía para Fuerzas Armadas Policiales, además de comités de autodefensa, se está diciendo que todos aquellos que se encuentran denunciados, investigados, procesados por cualquier hecho delictivo, por cualquier hecho delictivo, derivados u originados con ocasión de su participación entre los años ochenta y dos mil. ¿Qué va a venir luego? ¿También una amnistía para los asesinatos del gobierno de Dina? Porque recuerdo también, aquí tampoco se quiso instalar una comisión investigadora.

Y con eso se quiere hablar y se quiere generar un acto de justicia. ¿Justicia para quién? ¿Justicia para un lado? ¿Injusticia para la gente pobre? ¿Justicia para gente que no tiene voz, justicia para gente campesina que ha enfrentado también, lamentablemente, estos excesos y estos delitos que han cometido malos miembros de la fuerza policial?

Y si se cree que con esta propuesta más bien se están generando condiciones para mejorar, fortalecer, etcétera, defender a estas instituciones, mi opinión es que no es así. Lo que más bien se está generando es un mensaje hacia la ciudadanía, un mensaje que la gente más pobre, la gente cuyos derechos han sido afectados, como el caso de Cashahui, el caso de la familia de Marcelino Valencia, de Zacarías Pazca, o la matanza en la zona de los [...?], en la zona de La Convención, el mensaje es que esa gente pobre no puede tener justicia, no puede alcanzar justicia. Eso, presidente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

El señor PRESIDENTE.—Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Muñante.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Muchas gracias, presidente.

Cuando se habla actualmente de estos pseudoderechos humanos que hoy se protegen más desde los organismos internacionales que fueron creados para defender los verdaderos derechos humanos, se habla, presidente, de ese enfoque prodelincuente, de esa justicia pro reo, de esa justicia que se ha olvidado de las víctimas, de esa justicia que se ha olvidado de las personas que son incluso hasta procesadas por estos hechos.

Yo me pregunto, presidente, ¿dónde quedaron los derechos humanos de los policías y militares que combatieron al terrorismo y que hasta hoy están siendo juzgados? ¿Acaso la Convención Americana de los Derechos Humanos, acaso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no habla de una tutela jurisdiccional efectiva? ¿No habla del derecho al debido proceso? ¿No habla de un plazo razonable? ¿Cómo es posible, presidente, que se someta a cuestionamiento el hecho de que se pueda otorgar una amnistía a personas que están siendo denunciadas e investigadas hace veinticinco y treinta años? O sea, ¿quién está mintiendo aquí?

Lo que se propone, presidente, no es perdonar las penas de aquellos que cometieron excesos y por lo cual han sido sentenciados. Estamos hablando de aquellos denunciados, investigados hasta el día de hoy, y que no se encuentra ninguna prueba contra ellos. De ellos estamos hablando en este texto, presidente. Que no se confunda a la población y que lo escuchen bien los medios de comunicación, que seguramente estarán ya fabricando un reportaje sobre este tema.

No estamos beneficiando a personas que han sido sentenciadas y que han sido encontradas responsables. Es para aquellos —dice bien claro el artículo 1, numeral 1— que se encuentren denunciados, investigados o procesados, presidente, 25, 30 años. Esa es la justicia que hoy queremos defender en este caso, apelando a situaciones por las cuales ya existen personas condenadas, porque claro, se mencionaron algunos casos. Nosotros podríamos nombrar muchos más de los terroristas que mataron niños, que degollaban niños, presidente, porque consideraban que no merecían una bala; a machetazos mataban a pobladores indefensos.

También podríamos nombrar la lista de personas que han sido masacradas por esos terroristas, y nadie está pidiendo justicia contra ellos, porque varias de esas víctimas, hasta el día de hoy, están pidiendo justicia, presidente. Pero no vemos a ONG denunciando a estas personas que masacraron en nombre de una lucha armada, presidente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Entonces, aquí vemos un ensañamiento contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Sabe por qué, presidente? Porque esto ayuda a la narrativa de la tergiversación de la historia. Porque lo que quieren es que volvamos a repetir la historia. Ese es el objetivo de procesar hasta el día de hoy a militares y policías a quienes no se les ha encontrado pruebas, porque si se les hubiese encontrado pruebas, ya estarían sentenciados. Pero no, presidente. Y eso es lo que nosotros hoy estamos reclamando.

Luego, en el artículo 12, señala que, para aquellos que sí han sido sentenciados, a partir de los ochenta años podrían gozar de su libertad, un tema completamente humanitario, presidente. Pero en el artículo 1, que es lo que se quiere tergiversar mediante narrativas falaces, se está pretendiendo señalar que estaríamos otorgando la amnistía para todos. Y eso no es correcto, presidente.

Yo sí quiero llamar la atención con respecto a esto, para que no se desinforme a la población y se piense que aquí estamos buscando impunidad. Yo rechazo categóricamente esa afirmación, porque es falaz y porque, además, presidente, es antipatriota, es antifuerzas armadas, es antipolicía nacional.

Aquí reivindico, presidente, los esfuerzos que ha hecho este Congreso por defender precisamente esa institucionalidad y esa moral de nuestra Policía y nuestras Fuerzas Armadas. Porque, claro, hasta el día de hoy, presidente, siguen siendo denunciados y procesados y perseguidos políticamente, porque esto ya no es justicia, presidente.

Un juicio de veinticinco, treinta años, presidente, no nos engañemos, ya no es una investigación judicial, eso es persecución política pura y dura. Y hasta el día de hoy se siguen cometiendo esas injusticias, señor presidente. Por eso, sin miedo, sin temor, apoyaremos este proyecto en nombre de todos aquellos militares y policías que dieron su vida y que también lucharon para que hoy podamos estar aquí viviendo en democracia.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el congresista Quito.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Señor presidente, me da uso de la palabra, por favor, el congresista Mita.

El señor QUITO SARMIENTO (BS).— Gracias, presidente.

Sin miedo y sin temor, hay que señalar que esta ley es una ley de impunidad. Sin miedo y sin temor, hay que señalar que quieren reescribir la historia de nuestro país, señalando como héroes a aquellos que sistemáticamente violaron los derechos humanos en nuestro país. Sin miedo, sin temor, hay que señalar que, a lo largo de todos estos años, y aquellos que estuvieron en contra

DOCUMENTO DE TRABAJO

y en contra de la ley de impunidad en la década de los noventa, hoy veo que fervorosamente van planteando este proyecto.

Pero hay que señalar que, si bien es cierto que los procesos judiciales demoran, no son los únicos. Ese es un problema judicial que tiene que ver con otras cosas y, además, muchas veces el Congreso ha aprobado leyes dilatorias para que se esté en esta situación, con leguleyadas, para simplemente sostener en el tiempo estos proyectos, cuando deberían haber sido condenados hace mucho.

Entonces, creo que es claro y contundente señalar que aquí también se está afectando a los familiares, se está afectando a las víctimas, que no se quiere ni saber ni conocer qué es lo que pasó, que lo que aquí se quiere plantear es simplemente romper el hilo histórico de nuestro país, de lo que realmente ocurrió y cómo esas víctimas se han dado en nuestro país.

Así es que creo que es importante también señalar que esto, lo que hoy se pretende aprobar el día de hoy, está en contra de los convenios internacionales. ¿O es que aquí, en el Congreso, también nos estamos acostumbrando a irnos en contra de los convenios internacionales que suscribe el Perú?

Entonces, creo que es pertinente y adecuado señalar y condenar este tipo de proyectos de ley, porque dicen y se desdicen; solamente dicen que van a ser para los denunciados, investigados y procesados, pero más abajo señalan claramente que van a ser amnistiados todos, porque muchos de los oficiales que han estado en los ochenta o los noventa en estos temas ya sobrepasan los ochenta o van a llegar a los ochenta. Y, evidentemente, la amnistía se hace general de repente sin querer decirlo.

Entonces, presidente, considero y llamo a los congresistas a que podamos realmente tomar y tocar temas que sí van a beneficiar a la ciudadanía, a la población, y no solamente a un pequeño grupo. No sé por qué intereses, por qué situaciones se vuelve a tocar este tema, cuando creíamos que ya estaba zanjado y que más bien debería cuanto antes tomarse o darse a la población, a las víctimas, el resarcimiento, conocer qué es lo que pasó, quiénes fueron sus victimarios, y todos aquellos estar condenados en la cárcel y sufrir todo lo que corresponde de acuerdo a ley y justicia.

Y no hay ninguna persecución política, como de alguna manera se pretende indicar, que simplemente aquí la justicia en nuestro país es dilatoria por leyes dadas también a través de los distintos congresos que hemos tenido en el país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Congresista Flores Ramírez.

DOCUMENTO DE TRABAJO

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— Muchas gracias, señor presidente.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Señor presidente, le pedí el uso de la palabra.

El señor PRESIDENTE.— Saludándole a usted, a los colegas congresistas.

He estado escuchando muy atentamente el debate, señor presidente, y quiero empezar manifestando que me opongo tajantemente a este dictamen porque es inconstitucional, es ilegal, va en contra de la jurisprudencia en materia de derechos humanos a nivel internacional y, además, es inmoral y antiético.

Pretender impunidad para los responsables de asesinatos de gente inocente no es de democracia, no es de una sociedad civilizada. Aquí tiene que quedar claro, presidente, que no estamos hablando de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su deber hicieron uso legítimo de la violencia que le faculta el Estado. Estamos hablando de excesos, de situaciones extrajudiciales que claramente están documentadas por la historia.

Señor presidente, pareciera que las versiones que he escuchado vienen de la versión o a favor de los victimarios. Ahora yo voy a hablar de la versión de las víctimas. Completamente de acuerdo cuando usted sustentaba el dictamen y decía que nadie puede estar sometido a un proceso judicial eterno, que viola sus derechos, que viola su integridad, que afecta a la misma persona y a su familia. Pero también habría que preguntarse lo mismo de parte de las víctimas, que nadie puede estar exento de ser atendido por la justicia de manera impune por tanto tiempo.

Soy de la región de Ayacucho, donde lamentablemente se dio la mayor cantidad de casos de violaciones de derechos extrajudiciales. Lo mismo, presidente, hay personas que han perdido a su familia, gente inocente que nada tenía que ver con el problema político-social y que hasta ahora no ha encontrado justicia, que hasta ahora padece eternamente no saber qué ha pasado con sus familiares, de algunos desaparecidos y de algunos otros de no haber encontrado justicia.

Por lo tanto, presidente, en una coyuntura así no es aceptable pretender dar una amnistía a aquellos que están investigados, procesados por violar derechos humanos. No estamos hablando de los buenos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. (7) Y debe quedar claro, presidente, que no hay un solo caso de los comités de autodefensa; aquí se le ha puesto innecesariamente. Igual en el dictamen no habla de un solo caso de los miembros de los comités de autodefensa.

Estamos hablando entonces de policías y de militares. Y no son miles como dicen, apenas son seiscientos o un poco más, y son personas que tienen que responder a la justicia. No se puede

DOCUMENTO DE TRABAJO

amnistiar desde el Congreso, no se puede pretender el olvido para aquellos que son responsables.

Y les voy a dar algunos simples ejemplos, colegas congresistas. Aquí no es una cuestión ideológica, no es de sesgo ideológico, no es un tema de ONG, es un tema de derechos humanos, es un tema de respeto a la vida. El caso Accomarca, el caso Putis, el caso Ayacucho, [...?], y así podemos hablar.

En la actualidad, señor presidente y colegas congresistas, existen todavía fosas comunes en Ayacucho que no se han exhumado. De los pocos que se han exhumado, se han identificado algunos, y los responsables de esos hechos execrables contra la humanidad, contra la vida, están impunes.

Y nosotros vamos a pretender amnistiar. De ninguna manera, presidente. Nosotros rechazamos tajantemente todo tipo de terrorismo: el terrorismo subversivo, pero también el terrorismo de Estado. Nosotros, por supuesto, rechazamos ese terrorismo insano que empezó Sendero Luminoso en Ayacucho, que afectó a la región, que diezmó a la región, que mató a gente inocente. Pero también, presidente, hubo excesos. También, presidente, hay que ver que hubo malos efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, haciendo uso ilegítimo de la fuerza que le daba el Estado, abusaron de muchas comunidades campesinas y pueblos de Ayacucho.

Entonces, presidente, nosotros estamos queriendo confundir la situación como si fuera un ataque o una persecución a todas las Fuerzas Armadas o a la Policía, y no es así, presidente. Nosotros, por supuesto, valoramos, respetamos, por supuesto, reconocemos el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, esos herederos de Cáceres, de Bolognesi, que sí lucharon para defender al pueblo, no contra el pueblo, a esos que dignamente sí representan a Grau y que se inmolaron por los peruanos, no contra los peruanos.

Por lo tanto, presidente, debe quedar claro aquí que este proyecto de ley, este predictamen, no debe pasar, presidente. En democracia, en una sociedad civilizada, existen los procesos judiciales establecidos, y la solución no es la impunidad. Efectivamente, es cierto que tenemos un sistema judicial lento, burocrático, pero también eso se da para el lado de las víctimas, que tampoco encuentran justicia.

Entonces, presidente, he escuchado aquí manifestar que habría un plazo irrazonable de juzgamiento, que no se estaría respetando el debido proceso, y nosotros sabemos muy bien que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad, es superior a cualquier proceso, al debido proceso o al plazo razonable de juzgamiento, porque estamos hablando de derechos fundamentales que están amparados en la ley, en nuestra Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Y esto ya se vivió, colegas congresistas, en los años 90, cuando se amnistió a los miembros de las Fuerzas Armadas por el tema de Barrios Altos, La Cantuta, Santa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una sentencia diciendo que era incompatible, porque la violación de derechos humanos, el genocidio, es imprescriptible. No se pueden dar amnistías, no se pueden hacer leyes especiales.

Entonces, presidente, yo llamo a la reflexión. Yo, respetuosamente, veo las diversas posiciones que son válidas; por supuesto, tienen que ser discutidas. Pero creo, presidente, que cuando hablamos de la vida, del respeto a la vida, no puede haber excepciones, no puede haber leyes especiales mientras no se haya encontrado justicia. No estamos hablando de hechos aislados, no estamos hablando de uno o dos; son cientos, son miles. Las víctimas son miles, presidente.

En Ayacucho había mucha gente inocente, que nada tenía que ver. Entraban a la base militar, al cuartel Los Cabitos; nunca han salido, nunca se ha sabido nada de ellos. Algunos de ellos, recién ahora se han encontrado en la parte posterior del cuartel Los Cabitos. Casi parece un campo de exterminio nazi. Ahí están fosas comunes que están en pleno proceso de exhumación y reconocimiento. Gente inocente que nada tenía que ver ni con Sendero Luminoso, ni con el MRTA, ni con la violencia. Campesinos en muchos de los casos, presidente.

Por lo tanto, presidente, nosotros, de la bancada socialista, nos oponemos a este predictamen y llamamos a la reflexión de que aquí no se trata de una guerra de buenos y malos, no se trata de una guerra de ideologías, de una lucha en contra de las ONG o la postura de algunos. Sí, presidente, se trata del respeto a la vida. Y, en nombre del pueblo de Ayacucho, yo levanto la voz y digo que este dictamen pro impunidad no puede pasar.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Solo a manera de información, el Ejército nos ha remitido...

El señor .— Señor presidente, por favor.

El señor PRESIDENTE.— Calma, hay una lista.

Nos ha remitido una lista. Son solamente del Ejército: mil cincuenta de investigación preliminar, preparatoria, intermedia, etcétera, aparte de los policías, miembros de las otras instituciones como Marina de Guerra y Fuerza Aérea.

Tiene la palabra el congresista Lizarzaburu.

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (APP).— Muchas gracias, señor presidente.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Buenos días con todos. Yo quisiera saber cuál fue el exceso de la Fuerza Armada en Churchill. Me han mencionado, Churchill, que hubo un problema ahí con la Fuerza Armada. Y lo voy a aclarar, porque acá se está hablando, así como dicen ustedes, de reescribir. Ustedes quieren reescribir, ustedes quieren reescribir. En Churchill ocurrió el primer atentado de Sendero Luminoso, señor colega congresista. Con lo cual, lo que usted está diciendo es un invento.

Ya todos mis antecesores han hablado lo suficiente. Yo no voy a agregar nada más, señor presidente, pero lo que puedo decir es que la politización del Poder Judicial, la politización de la Fiscalía, es a donde nosotros tenemos que atacar; es la génesis del problema. Impresentable: juicios de 25, 30 años. Juzgar a los comandos Chavín de Huántar es impresentable.

Pero nosotros en esta comisión vamos a cambiar el tránsito de esto. Nosotros, en esta comisión, vamos a votar a favor y vamos a sacar adelante esto porque, fíjese, señor presidente, con las mismas armas que la ley otorga a un abogado de IDL para liberar a terroristas, nosotros con esas mismas leyes y con esas mismas armas vamos a sacar adelante con nuestros votos este proyecto. Nada más.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

El señor.— Señor presidente.

El señor PRESIDENTE.—Perdón, Mita está pidiendo la palabra hace rato.

Congresista Mita, adelante.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Muchas gracias, señor presidente.

Ya hemos estado escuchando a los colegas el debate, que es muy importante, porque si es cuando se trata de construir lo que es la paz social y para poder vivir lo que es un Estado democrático, pues tenemos que decir las cosas como son.

Y lamentablemente, los muertos que existen de gente inocente, no podríamos decir otra cosa que esos son los terroristas o esos son los responsables. Sin embargo, las pruebas que se tienen son de gente inocente que ha sido asesinada.

Asimismo, un poco lamento que no tengan tan claro el verdadero origen del Sendero Luminoso. Sabemos que fue creado por la CIA norteamericana en los años setenta, con complicidad de algunos peruanos, y se implementó en nuestro país para luchar contra Juan Velasco Alvarado en ese entonces, y eso está escrito en esa historia, y además se conoce públicamente. Pero tenemos que decir las cosas verdaderas y no ocultar.

Y aquel congresista que dice que ha sufrido las consecuencias, pues lamentablemente han sido enviados a la lucha sin

DOCUMENTO DE TRABAJO

conocimiento, sin información, y lamentablemente han sufrido las consecuencias. Pero la población no es responsable.

Aquí tenemos que ver quién ganó de todas estas luchas, quién ganó en estas, quién se apropió de todas las tierras, especialmente donde existen mayores recursos. ¿Quiénes ganaron? Aquí vemos las grandes empresas que se apropiaron de los bienes de esos campesinos, de esos hermanos que murieron. Aquí están las petroleras, ahí están las gasíferas, ahí están las mineras. Hoy en día siguen asesinando.

Entonces, la situación, o sea, tenemos que decir las cosas y que deben ser sancionados en realidad los responsables. No podemos decir que acá terminó y acá se persigue. Al contrario, más bien desde acá le instamos al Poder Judicial y al Ministerio Público a que ubiquen a los responsables y que sean sancionados todos aquellos inocentes; los pueblos que han sido perjudicados sean resarcidos de los grandes daños que han sido causados. No se podrán devolver las vidas de las personas, pero al menos económicamente se han resarcido sus daños, como hoy vienen llorando sus familias.

Y por ello, en este tema, en el tema de derechos humanos, aquel que odia, pues tenemos que entender que vivimos en un Estado democrático. Y si la democracia no se entiende, entonces, ¿en qué tipo de políticas se ha implementado en nuestro país? ¿Qué queremos? ¿Un gobierno fascista? ¿Un gobierno dictatorial? No sé qué es lo que buscamos en realidad.

Entonces, si vivimos en democracia, para que haya esa paz social, necesitamos que sean sancionados los responsables de ambos lados, tanto como del Sendero, que como esto fue creado, como decimos, acá hay una intromisión fuerte de países extranjeros, en lo cual nos han puesto realmente un problema grave entre nosotros. Y los que aprovecharon de esto son ellos hoy en día; acá se debe sancionar realmente a los responsables. Y no deben ser perdonados porque ellos no perdonaron la vida de los inocentes por apropiarse de recursos naturales.

Entonces, por ello, señor presidente, instamos a construir en paz una paz social que necesita nuestro país. Pues necesitamos sincerar y decir las cosas como son.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Congresista Flores Ramírez. Muy puntual, por favor.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— De manera puntual, presidente. Efectivamente, el colega Lizarzaburu ha preguntado qué ha pasado en Churchill, dice. Precisamente, yo creo que los que apoyan este predictamen es por desconocimiento o desinformación.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Caso puntual, presidente, le voy a responder. El día 14 de marzo de 1991, una patrulla del Ejército, proveniente de la base contrasubversiva Pampa Cangallo, con el auxilio de algunos miembros del puesto policial del distrito de Churchill, detuvo a Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Callao Galindo, Marcelo Cabana Tucno, autoridades del distrito de Churchill, y al menor Isaías Huamán Vilca. Los detenidos fueron conducidos por los militares a la base contrasubversiva de Pampa Cangallo, y desde entonces tienen la condición de desaparecidos. Esa es la realidad, presidente. No estamos hablando de los buenos miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía.

En democracia, presidente, no se pueden desaparecer seres humanos, personas. Todos tenemos derecho a la vida, todos somos iguales, todos tenemos derecho a saber, ¿no? La familia de estos señores tiene el mismo derecho que los militares y los policías a reclamar justicia. ¿Quieren saber dónde está su familia? Vivir en esa incertidumbre, ¿ustedes se imaginan, colegas congresistas, durante veinte, treinta, cuarenta años?

Creo que hay que analizar, presidente, desde ese punto de vista. Y así podríamos hablar de Putis, de Cayara, de Accomarca, de Totos, de Umasi, infinidad de lugares que están, lamentablemente, todavía sin esclarecerse. Por lo tanto, presidente, yo creo que muchos de los colegas congresistas que están apoyando este predictamen es producto de no haberse informado bien.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Congresista Moyano, tiene la palabra.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidente.

Me pidió una interrupción el congresista Muñante. Yo le concedo.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— Sí, presidente.

Lo que sucedió en Churchill y lo que no se ha dicho por el congresista Alex es que un grupo armado de cinco encapuchados irrumpió en el local donde se guardaban las ánforas y quemaron los padrones y las ánforas. Y allí inició el terror de Sendero Luminoso. Eso también sucedió en Churchill, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— Gracias, presidente.

Lo que acaba de decir la congresista Muñante hila el inicio de su lucha armada, entre comillas, de estas miserables.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Señor presidente, para todos los que estamos acá, o por lo menos para la mayoría de los que estamos acá, de alguna manera somos testimonio de lo que ocurrió, señor presidente. (8)

El Perú entero, obviamente, pero el Perú tiene una herida no cicatrizada, señor presidente, y esa herida no cicatrizada precisamente se quedó abierta por las injusticias que se cometieron después del 2000, cuando empezaron a cazar militares, a cazar soldados, a cazar policías, a inventarles procesos, señor presidente. Estoy tratando de armarme de valor, señor presidente, para no perder las formas.

Yo visitaba, señor presidente, a militares y policías hace muchos años en otro período, y visité a un militar y soldados en Lurigancho, uno de ellos el caso Monzón. Solamente es una prueba de cómo se inventaba, señor presidente.

En el caso Monzón había un terrorista muerto, detenido y después muerto, y acusan al jefe de esa zona de haber asesinado a estas personas. Años después lo capturan y lo tienen preso en Lurigancho.

Y cuando van al proceso, señor presidente, le muestran un hueso, un fémur de una persona muerta. El proceso era como del año 2002, más o menos, por poner un ejemplo. Y cuando ellos solicitan la antigüedad de la muerte de aquella persona de la que se refería el hueso, era más o menos como cuatro años atrás, cuando el caso había ocurrido en los 90, señor presidente. Esto es lo que armaban. Y para nadie es un tema oculto.

Ese señor está preso; amenazaban a sus familias. Sus familias, señor presidente, tuvieron que vivir el vejamen, la denigración que iniciaron estos desgraciados después, no los terroristas finalmente, sino aquellos que justificaban su accionar, llamándoles lucha armada interna, violencia política. Nada más hipócrita que puede haber, señor presidente.

El Perú vivió, se desangró, y no solamente militares, civiles, señor presidente. Están hablando de los civiles de los que dicen que mataron los policías y los militares, ¿y los civiles que mataron a los terroristas, señor presidente? Ah, no, ahí no son humanos, ahí no hablan de justicia. Y los terroristas degollaban personas para generar el terror como herramienta política, porque el terror lo usaron como herramienta política, y el Estado tenía que defenderse, el gobierno tenía que defenderse. ¿A quién tenía que usar? A sus mejores hombres, su mejor norma. La Constitución la tuvieron que reformar para poder usar ese elemento importante, que es la ley de leyes, señor presidente.

Los senderistas no sólo trataban de humillar a la policía, sino de generar terror. Poner una dinamita a una persona que ya estaba caída en el suelo, ¿qué significa? ¿No es terror? ¿Eso es lucha armada? ¿Es violencia interna? ¿Es pelear de igual a igual? ¿A eso le llaman, mis colegas congresistas? No sé qué cosas he

DOCUMENTO DE TRABAJO

sentido, señor presidente, en estos momentos cuando he escuchado una versión que la vengo escuchando años, años, señor presidente.

Construyeron una historia, por supuesto, en beneficio de los terroristas. Me da vergüenza, señor presidente. Y espero que este Congreso resarza todo eso.

Yo me imagino al policía que estaba protegiendo a Maria Elena Moyano: si en algún momento hubiera usado su pistola y mataba a uno de esos terroristas malditos, él sería procesado, además de la bala que tenía en el estómago. Es la cicatriz de la que habla el congresista Azurin. ¿Y quién habla de la cicatriz de las familias, presidente? ¿Los hijos? ¿Quiénes han atendido a las viudas de los policías y de los militares? ¿Quiénes?

Cuando converso con ellas, señor presidente, yo soy parte de la Federación de Víctimas del Terrorismo; todavía les tiembla la cara, el rostro, señor presidente. Nadie habló con ellos. Nadie. Pero, escuchan historias inventadas contra sus familiares, contra sus esposos, contra sus hijos. Por años, perseguidos.

Este Congreso tiene que responder, señor presidente. Y estoy segura de que este Congreso va a responder contra esas voces que siguen inventando historias. Cajones llenos, obviamente, señor presidente. Nadie, nadie puede llenarse de alegría con muertes afuera de un lado o de otro, nadie.

Es muy duro, esta situación es muy difícil, señor presidente. Pero es como que nosotros permitamos que ahora unos delincuentes se metan a su casa, señor presidente, a la suya, maten a su hija, violen a su esposa, y que usted responda con un arma y lo mate, y usted sea el procesado. Esa es la figura. Esa es la figura. Y si usted mata a dos, usted es un maldito desgraciado, usted cometió injusticia, y entonces alguien sale a defender a la familia de ese terrorista. Esa es la figura. Y les vendieron historias a los niños en los colegios.

No olvidemos que inventaron, incluso en esos libros de Escuela Nueva, no me acuerdo cómo se llama el libro de Bruño, inventaban que los policías eran malos y los terroristas eran los buenos, que defendían a los campesinos. Y nosotros lo hemos denunciado en ese tiempo, señor presidente. Pero claro, en ese tiempo, en ese tiempo, señor presidente, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso tenían otra historia que querían contar y lavar la cabeza de los jóvenes.

Más de veinte años ya es una vida, señor presidente, ya es una formación y es un niño en formación que ya salió de la universidad o que ya le lavaron la cabeza. Nosotros denunciemos esos libros. Este Congreso, ahorita, esta comisión va a luchar contra esa narrativa, contra esa narrativa que tiene más de veinte años, más de veinte años. Y por supuesto, señor presidente, con los ojos cerrados, yo voy a votar por este dictamen.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Moyano.

Tiene la palabra el congresista Caverero.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— Gracias, presidente.

Presidente, mire, yo tengo treinta y tres años, ¿no? Yo nací el año 92, y creo que los jóvenes de mi generación tenemos que estar profundamente agradecidos con todos los policías y militares y miembros de las Fuerzas Armadas, que nos permitieron a nosotros crecer en un país mejor, presidente. Crecer en un país en paz, en un país infinitamente más libre y democrático que el que heredaron nuestros padres o nuestros abuelos. Y en lugar de que gente de mi generación se esté dedicando a perseguir militares y policías, debemos dedicarnos a agradecer. La gente buena es agradecida, presidente.

El problema de esta discusión, en el fondo, es que la justicia que tarda no es justicia. Y cuando el Estado se pasa cuarenta años persiguiendo un delito o investigándolo, pierde absolutamente la legitimidad de juzgarlo, presidente. Luego de cuarenta años, el Estado simplemente no tiene legitimidad para continuar eso, porque atropella en el camino todos los derechos fundamentales, los más básicos: el debido proceso, el derecho de defensa, entre otros.

Y después de cuarenta años, presidente, lo que suele ocurrir es que, si no es tiempo suficiente para encontrar una prueba y condenar a alguien, lo que se busca es forzar una condena, es encontrar con triquiñuelas la forma de condenar a como dé lugar, porque esa es la consigna política y no porque es lo que manda el derecho. Entonces, después de cuarenta años, el Estado simplemente no tiene legitimidad; ya perdió total y absoluta legitimidad. Y, por tanto, es que la decisión política de la amnistía procede, presidente, y es importante.

Ahora, yo sí creo, presidente, que hay aquí algunas cosas que se pueden ajustar. La primera es que, efectivamente, no es lo mismo un miembro de las Fuerzas Armadas que ha estado cuarenta años sometido a un proceso judicial, en las condiciones que han mencionado mis colegas, de sometimiento, de persecución, de abuso del derecho por parte de la Fiscalía y del Estado, y otra es un miembro que en su momento decidió irse del país y fugarse y no ponerse a derecho, pudiendo haber sido culpable o no, o no habiendo decidido afrontar la justicia. Creo que son dos situaciones diferentes, en todo caso.

Entonces, yo sí creo, presidente, que una cosa fundamental que tenemos que incorporar aquí es que, efectivamente, denunciados, investigados o procesados que se hayan puesto a derecho. Porque creo que parte de la persecución y del abuso del Poder Judicial y del Ministerio Público, después de cuarenta años, es contra

DOCUMENTO DE TRABAJO

esos buenos militares y policías patriotas que han ido diligentemente al Poder Judicial y han sido perseguidos. Y hay que decir basta. Después de cuarenta años, hay que decir basta y hay que decir que el Estado ya no tiene simplemente legitimidad para seguir juzgando después de tanto tiempo, presidente, porque lo que se busca, evidentemente, es forzar una condena sin pruebas, y eso está mal. Y la decisión política del Parlamento de dar una amnistía tiene que ir en ese sentido.

Y lo otro, presidente, que creo que también podemos ajustar, es en el artículo 2. Efectivamente, se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de ochenta años, que pueden haber sido condenados. Puede haber sido gente, efectivamente, condenada en un proceso, y que por más de tener cuarenta años se les dé amnistía, pudiendo haber sido culpables. El artículo 1 sobre procesados, el artículo 2 puede incluir sobre condenados.

Entonces, presidente, que si vamos a hacer una amnistía humanitaria para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas mayores de ochenta años, hay que colocar de alguna manera que se encuentren en un estado de deterioro de la salud que permita o que justifique un indulto humanitario, una suerte de amnistía humanitaria, como se está planteando en el segundo artículo. Si no, simplemente por tener más de ochenta años, alguien que pueda ser condenado por un delito podría simplemente salir libre.

Entonces, creo, presidente, como está redactado en el artículo 2, dice que cuenta con sentencia firme con calidad de cosa juzgada. Entonces, es alguien que ya ha sido condenado en el artículo 2. Yo creo que hay que colocar ahí la especificidad o, en todo caso, las salvedades de que sea alguien cuya salud esté en constante o permanente deterioro.

Y con eso, presidente, yo creo que igual vamos a hacer enorme justicia a las Fuerzas Armadas. Creo que hay muchísimos miembros, solamente mil en el Ejército, como usted ha mencionado, y seguramente otros tantos en la Marina y en la Fuerza Aérea.

Y creo que vamos a hacer justicia, presidente, por aquellos que precisamente no han encontrado justicia y que, después de cuarenta años, no hay solución frente a un Estado indolente, politizado, cuya consigna ha pisoteado el derecho y todos los derechos fundamentales que esa consigna, presidente.

Entonces, yo voy a votar a favor de este dictamen. Creo que es de justicia, creo que es de agradecimiento frente a una generación, presidente, que hoy día son 40 % del Perú, que tiene menos de treinta y cinco años. Casi la mitad del país ha crecido en un país absolutamente distinto al país en el que crecieron nuestros padres o nuestros abuelos, y por eso, presidente, hay que ser agradecidos.

Gracias.

DOCUMENTO DE TRABAJO

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Tiene la palabra el congresista Cutipa.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Gracias, presidente.

Presidente, quienes están de acuerdo con este predictamen nos traen —no voy a decir narrativa—, nos traen en la narración la figura de que lo que se pretende con este dictamen es respaldar, otorgarles derecho, justicia a quienes pelearon contra el terrorismo. Y eso no es tan cierto, presidente, porque una cosa sí hay: soldados y policías que lucharon contra el terrorismo. Y al terrorista, presidente, si se pudiera, yo decidiría que se le ponga dos cadenas perpetuas y, si es posible, dos penas de muerte. Porque aquí nadie está defendiendo al terrorista, ni a los terroristas.

Aquí, presidente, de lo que se está discutiendo es de aquellos uniformados, de aquellos malos uniformados que en un caso ya fueron condenados, presidente, ya fueron condenados, se sujetaron a un proceso judicial, se defendieron y ya fueron condenados. Contra ellos, presidente. No a los buenos efectivos policiales o militares. Esa narración creo que pretende más bien confundir a la población, y en eso yo quiero ser claro, presidente. Sí creo que están buscando impunidad, presidente. Se lo digo con mucho respeto, sí creo que están buscando impunidad.

Dicen: pongamos alto a esta persecución. Presidente, el Poder Judicial constitucionalmente tiene esa tarea de procesar y, luego del proceso, si se determina que hay responsabilidad, condenarán, y si no la hay, presidente, lo absolverán.

El otro tema, presidente, que dicen: no les importa la defensa de los derechos humanos. ¿Como qué no? Nos importa. Por supuesto que nos importa. Y si el elemento terrorista atentó contra un ciudadano, por supuesto que le tiene que caer todo el peso de la ley a ese terrorista.

Pero, presidente, algunos dicen: ya dejemos el tema de los derechos humanos. Eso sí es una narrativa que constantemente se dice, como que el tema de los derechos humanos viene de afuera hacia adentro. Pero los derechos humanos, presidente, con diferente denominación, están comprendidos en nuestra Constitución Política del Perú, artículo 2. En consecuencia, pretender que se ponga de lado o se cierren los ojos a los derechos humanos de las personas, (9) presidente, es negar el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, porque ahí contempla los derechos fundamentales de la persona.

Después dice: *Después del año 2000 empezaron a cazar...*

¿A cazar, presidente? ¿Qué, a los buenos policías, a los buenos soldados se les empezó a cazar? No, presidente. A los buenos soldados y a los buenos policías, por supuesto que el Estado tiene que reconocer ese aporte, ese sacrificio que le dieron al

DOCUMENTO DE TRABAJO

Estado, que le dieron a su pueblo; pero también, presidente, al mal policía y al mal soldado se le tiene que castigar y sancionar, presidente.

En ese sentido, presidente, hay que tener presente lo que señala el artículo 138 de la Constitución, que le otorga esa potestad de administrar, de impartir justicia al poder judicial.

Claro que está en la competencia del parlamentario aprobar este predictamen, pero no sería de justicia, presidente, no sería de justicia; se aprobaría porque posiblemente tengan los votos, lo que llamamos la dictadura de los votos, que en democracia, que en un estado de derecho se acepta, pero no se va a compartir.

Nosotros vamos a votar en contra, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra la congresista Echaíz.

Congresista Echaíz.

La señora ECHAÍZ RAMOS VDA. DE NÚÑEZ (HYD).— Disculpe, presidente, estaba distraída.

Bueno, quienes tenemos ya algunos años y hemos sido testigos presenciales no solo como ciudadanos, sino también como funcionarios, de lo que ocurrió entre los años 80, 90, aquí en el país. Podemos dar fe de que hubo una lucha armada, hubo dos organizaciones de civiles que se estructuraron de manera militar con la finalidad de tomar el poder, tanto que a uno de ellos lo llamaban presidente Gonzalo.

Yo me pregunto, ¿cómo se llaman o cómo se les llama a las personas que fueron asesinadas, que fueron ejecutadas sumariamente, sometidas o condenadas a muerte por los tribunales populares que tenían estas organizaciones criminales, entre los que no diferenciaban ni a mujeres, ni a hombres, ni tampoco a niños y donde las violaciones también se dieron?

Mi familia, mi esposo fue condenado a muerte, se llevó a cabo la ejecución. Dios quiso que mis hijos menores de edad, la que les habla y él se salvara. Pero mi casa sí fue destruida con bombas a media noche, sin posibilidad de defensa alguna. Sí nos enteramos quiénes y en qué lugar fuimos condenados a muerte.

Pero la justicia no es odio, la justicia no es venganza, la justicia tiene una finalidad y el Estado un plazo, un plazo para perseguir eso, ese delito y sancionarlo, al cabo del cual se extingue su potestad punitiva. Y esa llamada prescripción o caducidad, en algunos casos, se aplicó a los miembros de los ejércitos populares e integrantes, tanto de Sendero como del MRTA. Y se prescribieron sus acciones por haberse extinguido la potestad del Estado al no haber podido ser condenados dentro de los plazos ordinarios establecidos por la ley nacional.

DOCUMENTO DE TRABAJO

¿Dijo algo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto? ¡No dijo nada!

Yo podría traer acá la relación de víctimas que me tocó conocer cuando era fiscal provincial. Pero no eran víctimas de la Policía ni del Ejército, sino del otro lado, del otro ejército que se llamaba Ejército Popular.

El tiempo ha pasado y yo, habiendo sido víctima de uno de esos ejércitos populares, apliqué la ley porque es lo que corresponde. El odio no es justicia, la venganza tampoco, la retribución tampoco, lo que la justicia busca es la readaptación del delincuente, la oportunidad de que se reinsera a la sociedad y no vuelva a cometer esos hechos o esos delitos.

Ahora bien, frente a una acción hay una reacción. ¿Fue el Ejército peruano el que provocó, el que inició estas persecuciones? No

Al igual que ahora que reclamamos la presencia policial para perseguir a los secuestradores, a los extorsionadores y a todos aquellos que están causando alarma y zozobra en la población; entonces los ciudadanos, los civiles, reclamamos la presencia del Ejército peruano para defender el estado de derecho del país, para evitar que sea tomado por terroristas, porque eso es lo que hubo: "Terror". Se mataba por la espalda y a mansalva. A las autoridades nos amenazaban en las diligencias: "Te voy a matar, sé dónde vives, dónde estudian tus hijos, dónde queda tu casa". Eso nos decían.

Pero nunca les respondimos con las mismas armas, porque hay que marcar la línea divisoria entre el ciudadano de bien y el ciudadano que entiende lo que es un delito y el que no lo es, los roles que cumplimos dentro de la sociedad. Si un delincuente actúa, están las fuerzas del orden para recuperar el orden establecido.

Lo que se busca es evitar la alteración o reponer la alteración del orden público, del orden interno que fue alterado por quienes se dedican a cometer delitos.

El tiempo ha pasado, leyendas se han propalado, se ha escrito mucho, pero novelas. La verdad está en los expedientes, la verdad es la que conocemos nosotros los que hemos vivido en esos tiempos, los que hemos conocido la muerte de cerca.

¿Cómo podemos venir a decir acá: víctimas son unos y no son los otros!

¿Acaso estamos hablando de indefensos? No, no. Ahí porque se le daba el vaso de agua a un militar, venían los del Ejército, — ¿cómo le llamaremos?, no sé, las víctimas del Ejército— y mataban pueblos enteros. Eso es lo que nosotros hemos visto, no nos han contado, no es el libro que escribieron para deformar la historia.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Señor, yo creo que habiendo transcurrido 25, 30, 40 años en algunos casos, y no haber alcanzado la condena, haber hecho posible alguna condena, ya sea seguramente por falta de pruebas, dicen que porque se fueron. ¿Y dónde está la extradición? Seguro que no la pudieron pedir porque la extradición exige requisitos: Prueba, ley, que la ley de acá se dé también allá, que exista una norma en ambos países, plazo de prescripción.

¿Por qué no los han traído? Si no se pudo condenar, pasó el tiempo y prescribió.

Pero como hay una Corte Interamericana a la que nunca le pusieron seguramente una bomba ni conoció el secuestro o las desapariciones, secuestros y torturas en celdas de uno y medio por uno y medio, sin agua, sin nada, personas paradas ahí por días y días y días, a los que nosotros teníamos que rescatar casi cadavéricamente. ¿Dónde estaban esos derechos humanos? A esos señores yo les digo que ojalá nunca conozcan el terror que vivimos los peruanos.

Por eso, señor, yo sí estoy de acuerdo con esto. Muchos de los jueces que ahora hablan de derechos humanos, fueron testigos presenciales de lo que ocurrió. Pero claro, a ellos no los tocaron, seguramente por eso se olvidaron, pero conocen la verdad, saben lo que pasó en aquel tiempo, muchos de los que todavía están en actividad. Y ojalá la memoria les venga, o la recuperen, y que se pongan en su rol de jueces imparciales, neutros y resuelvan si es que se cuestiona esta ley en algún momento.

Lo que sí no estoy muy segura es en el caso de los condenados, porque me parece que la amnistía es para los procesados y es potestad del Congreso; y el indulto le corresponde al Ejecutivo, es individual en el caso de los condenados. Es algo que si yo le pido que revise, señor, que está en el artículo segundo.

Por lo demás, yo estoy perfectamente de acuerdo y me parece que más allá de las posiciones políticas, de lo que 30 o 40 años después se venga a decir e incluso aquí en este Congreso se ha hablado en la Comisión de Justicia, hay proyectos donde se reclama la prescripción, la amnistía para los nativos, aun cuando hayan violado derechos humanos. No ha pasado ese proyecto. Pero entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que creemos acerca de estas instituciones? ¿Para unos sí, para otros no!

Las instituciones son una sola y funcionan para el universo de lo que ocurre. ¿Cuáles son los derechos humanos? Todos: La vida, la libertad, el nombre, la honra, todos son derechos humanos, no existe un derecho humano y otro derecho humano, porque en todo caso, entonces tampoco existiría la prescripción para los delitos comunes, esos no son contra los derechos humanos.

DOCUMENTO DE TRABAJO

En términos generales, señor, yo estoy de acuerdo con este dictamen y, en todo caso, sería bueno que volvámos a recordar lo que pasó y a rescatar todas las —¿qué le puedo decir?— las pruebas vivientes que deben estar en los archivos judiciales o policiales, porque frente a la evidencia no hay argumento que valga, señor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Tiene la palabra el comunista Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Muchas gracias, señor presidente. Saludos a todos los congresistas presentes, muy buenos días.

Señor presidente, por un tema procesal no se podría amnistiar, pero tampoco amparados en que se trata de derechos humanos se pueda eternamente mantener a peruanos a procesos judiciales eternos; y en algunos casos, señor presidente, los procesados mueren.

Más bien yo le haría un llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, que podrían acelerar este tema, porque yo creo que también no pueden estar pues 40 años o 30 años en un proceso, prácticamente. Y bueno pues, tiene que haber un plazo razonable, ¿no?, sin vulnerar obviamente todos los procedimientos. **(10)**

Presidente, creo que es importante también el derecho a la verdad.

Justamente aquí estoy viendo, en el predictamen del consultor, en este caso del doctor Aníbal Quiroga.

Él no dice:

“A la luz de lo expuesto, resulta jurídicamente inviable y contrario a los compromisos internacionales asumidos por el Perú, la promulgación de un proyecto de ley que otorga una amnistía general a las Fuerzas Armadas.

La adopción de una norma de tal naturaleza comprometería gravemente el derecho a la verdad, socavaría los principios fundamentales de justicia y promovería un clima de impunidad”.

Creo que también esa parte hay que analizarla.

Sin duda, nosotros no es que estemos en contra de las Fuerzas Armadas, creo que las Fuerzas Armadas han jugado un rol muy importante en la década de 80, 90.

Muchas veces, señor presidente, cuando Sendero Luminoso o MRTA...

Por ejemplo, estuve en el año 2011, cuando trabajaba en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, fuimos con el equipo técnico a Soras.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Obviamente, en Soras Sendero Luminoso hizo una masacre, señor presidente. 117 personas asesinadas, personas inocentes.

En Huancavelica, por ejemplo, el caso del distrito de Marcas, en el distrito de Chincho, en Julcamarca, Antaparco.

Creo que las regiones que han sido más afectadas fueron Cusco, Ayacucho, Huancavelica.

Entonces, hay casos en los que, obviamente, también por parte de las Fuerzas Armadas hubo excesos, señor presidente.

Tampoco nosotros estamos diciendo que todas las Fuerzas Armadas son malas.

Obviamente, nosotros valoramos, particularmente yo valoro mucho nuestras Fuerzas Armadas.

Y aquí tenemos al congresista Williams, él es una persona muy destacada.

Igual, el congresista Jorge Montoya, el congresista José Cueto, el congresista Alfredo Azurín, que son representantes, señor presidente.

De ninguna forma puedo tergiversar y decir que todas las Fuerzas Armadas son malas.

Obviamente, hubo excesos también por parte de las Fuerzas Armadas.

Nosotros, señor presidente, vamos a votar responsablemente con el congresista Aragón en representación de mi Grupo Parlamentario de Acción Popular.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

En efecto, las Fuerzas Armadas intervinieron en la lucha antiterrorista a partir del año 1983, por decisión del presidente Fernando Belaúnde Terry.

Y, en efecto, como dice el congresista, la mayor cantidad de víctimas fueron en el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, en los años 83, 84 y 85.

El presidente respaldó firmemente a sus Fuerzas Armadas y, como dijo en frase célebre, envió al tacho el informe de una de estas ONG de Derechos Humanos llamada Amnistía Internacional.

Gran presidente Belaunde Terry.

Congresista Aragón.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— Señor presidente, muy buenos días.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Saludar a usted, a todos los colegas integrantes de la Comisión de Constitución y a todos los que están atentos al debate de la Comisión.

Primero, señor presidente, hay que manifestar que cómo circunscribimos el derecho a un plazo razonable.

Se ha manifestado y se ha dicho que el derecho a la vida es un derecho fundamental, por cierto, que lo es.

Sin embargo, también en la Constitución Política del Estado vigente tenemos principios y derechos de la función jurisdiccional que están reguladas en el artículo 139 de la Carta Magna, inciso tercero, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Señor presidente, el derecho a que un proceso concluya en un plazo razonable obliga no es sino al legislador a fijar un plazo determinado del proceso.

Es una competencia, por supuesto, del Parlamento Nacional, del Congreso de la República.

Se ha manifestado que esta iniciativa legislativa no se aplica a condenados por corrupción, se ha manifestado que se deben respetar los fallos judiciales firmes, las condenas que ya el Poder Judicial, en calidad de cosa juzgada, haya sentenciado, al margen de que sean policías, militares o expolicías, exmilitares, en fin, o ciudadanos, terroristas que hayan sido condenados por temas de violación de los derechos humanos y el derecho a la vida.

Pero esta iniciativa legislativa, obviamente, si leemos el artículo primero, está en función a que se concede la amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a los integrantes de los comités de autodefensa que se encuentran denunciados, investigados o procesados por esos hechos delictivos del año 80 hasta el año 2000.

En tal sentido, señor presidente, el derecho a ese plazo razonable es un derecho no sólo reconocido por la Constitución Política del Estado, sino por los tratados internacionales, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana, por el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y la Carta Magna vigente, reitero.

En tal sentido, creo, señor presidente, que hay que revisar también jurisprudencia que ha sido dictada por el Tribunal Constitucional peruano.

Si bien es cierto, tenemos el Expediente 3509 del año 2009, que sí, efectivamente, regula el derecho a un plazo razonable y nos dice que es un derecho público subjetivo de los ciudadanos, limitador del poder estatal, provoca el nacimiento de una prohibición para el Estado de continuar con la persecución penal

DOCUMENTO DE TRABAJO

fundada en la pérdida de una legitimidad punitiva, y esa legitimidad punitiva derivada de un quebrantamiento, en realidad, del derecho individual de naturaleza fundamental.

Pero también tenemos una jurisprudencia, que está en función al Expediente número 618 del año 2005, en el fundamento número 10, el derecho a que un proceso tenga un límite temporal entre el inicio y el final.

Y esto tiene que formar parte del núcleo, en realidad, de derechos reconocidos por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y no puede ser desconocido.

En tal sentido, tenemos jurisprudencia en el TC, el artículo 3509 y el Expediente 618. Dos expedientes que obligan –podríamos decir– a que tengamos que respetar ese derecho a plazo razonable en función a otro expediente, el Expediente 3640, donde el Tribunal Constitucional incluso otorgó diez días a un juez para resolver de forma definitiva procesos que tienen más de cinco años sin avanzar.

En fin, tenemos una serie de jurisprudencias dictadas por el propio Tribunal Constitucional peruano.

Cuando hablamos del plazo razonable, hay que evaluar criterios, señor presidente, y no solamente está la actividad o conducta procesal del interesado, sino también la complejidad del asunto, la conducta de las autoridades judiciales.

En tal sentido, estar con procesos, ya lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, con más de 40 años, 30 años, 20 años, 25 años, implica que también tiene que haber una protección de parte del Estado peruano a todos aquellos que, por deficiencias, faltas graves o qué sé yo, una serie de argumentos, miembros del Poder Judicial a la fecha no han dictado sentencia, no cumpliendo con los plazos que establece, obviamente, en ese entonces, el Código de Procedimientos Penales, ahora Código Procesal Penal, los plazos que señala la Constitución Política y el Código Procesal Constitucional vigente.

Algunos juristas han manifestado, ante este problema del plazo razonable, que la solución está en aplicar los remedios procesales dentro del derecho.

Y los remedios procesales para sustituir estos problemas de falta de cumplimiento del plazo razonable no es sino –dice– el remedio procesal del habeas corpus, la acción de habeas corpus.

Pero si nosotros aplicamos o queremos aplicar este remedio procesal, señor presidente, las acciones de habeas corpus tampoco han cumplido ese objetivo fundamental, esa naturaleza jurídica para la cual ha sido instituido y es regulado en el Código Procesal Constitucional.

DOCUMENTO DE TRABAJO

En tal sentido, ese argumento no me parece razonable de algunos juristas que dicen: "Señor, efectivamente, ante los problemas del plazo razonable, los perjudicados tendrían que presentar sí sólo sí sus habeas corpus, y con eso solucionan el problema y no es necesaria una Ley de Amnistía".

Pero no ha funcionado. Se han violado los plazos. Los magistrados y jueces han violado los plazos, porque en esas acciones de garantía constitucional no se ha tomado en cuenta ese plazo razonable ni siquiera de los procesos de habeas corpus que, se entiende, tienen una urgencia para su resolución.

En tal sentido, señor presidente, el tema del plazo razonable es fundamental.

Cuando hablamos de una prisión preventiva, de una investigación preliminar, de un proceso civil, se aplica el plazo razonable.

Aquí ya resulta *sui generis* que existan procesos, como reitero, de 40 años, 30 años, 20 años, 25 años, etcétera, y no haya gente que haya sido absuelta, ni condenada, ni sentenciada, y obviamente eso nos genera mucha preocupación.

Finalizo, señor presidente, manifestando que sí reconocemos que han existido también algunos excesos de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, de algunos miembros de la Policía Nacional, por supuesto, que sí, también han existido en estos años.

Pero debemos perseguir al delincuente, debemos perseguir al terrorista, debemos perseguir a esas personas que no han estado al amparo o en defensa del Estado peruano, en defensa de la Constitución, en defensa de la vida humana.

¿Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ampara? Sí.

¿Existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

También del sistema interamericano.

Porque el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a hacer oída dentro de un plazo razonable, dentro de la vía respectiva.

Entonces, existe todo un fundamento jurídico, doctrinal, jurisprudencial sobre la materia, señor presidente, y considerando incluso que se aprobó ya en su momento la Ley 32107.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista.

Vamos a dar por finalizado el debate acá.

Les recuerdo que tenemos sesión del pleno a las tres de la tarde.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La otra vez prácticamente nos empujaron, nos quitaban las sillas ya y teníamos que salir de acá.

Estamos en el punto 2 de seis. Ojo.

Un minuto, congresista,

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).—Gracias, presidente.

Además del problema que genera la extrema demora en estos juicios, se hace a personas que fueron enviadas a esos lugares.

O sea, la parte militar y policial, particularmente la militar, va a cumplir una orden que le da la parte política, va a desarrollar toda una tarea en el lugar.

Entonces, además de que, como se ha dicho, hay demasiada demora en los juicios, también está involucrando, presidente, como dije hace un momento, no solamente a quienes estuvieron en el lugar, sino también a las otras patrullas que de alguna forma estaban en el área, a sus capitanes, a sus comandantes y a la brigada.

Por eso, es que sumamos mucha gente. Por eso, es que se está dando esta situación, y tenemos cuestiones que datan de 40 años con juicios de 35, con juicios interminables.

Presidente, sólo para precisar.

Sendero Luminoso fue un movimiento marxista-maoísta, **(11)** que desde el año 1969 al 1970 se prepara para iniciar el 80, o sea no vino de otro lugar el problema, comenzó ahí e hizo una cosa gravísima, gravísima, presidente, es comprometer a la población y llevarlos a un conflicto, a una guerra interna, haciendo que muera mucha gente y por eso es por lo que los comités de autodefensa se le opusieron y los combatieron.

Lo dejo ahí, presidente, por cuestiones de tiempo

El señor PRESIDENTE.— Y para continuar, sí.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— Urgentes.

El señor PRESIDENTE.— Eso era abrir el debate nuevamente.

Un minuto, por favor.

La señora LUQUE IBARRA (BDP).— Gracias, presidente.

Presidente, en realidad no estamos debatiendo lo de Sendero, creo que nos queda claro el rol que jugó, nefasto de Sendero Luminoso y el MRTA y están sancionados sus cabecillas a cadenas perpetuas. Aquí el tema central es que lo que se está planteando es una ley de impunidad para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comités de Autodefensa. Ese es el tema central y aquí no se quiere excluir los delitos por los cuales han sido investigados, y aquí hemos narrado a algunos congresistas casos concretos, delitos de manera concreta.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señora congresista.

Les recuerdo solamente que el artículo 102, inciso 5 de la Constitución dice, “ejercer el derecho de amnistía”, por eso la amnistía se aplica a personas condenadas o sentenciadas, no hay una diferenciación en la Constitución.

No habiendo más intervenciones, se pone al voto el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, que propone la “Ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional del Perú y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en los años 1980-2000”.

Señora Secretaria Técnica, proceda a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal:

Con su venia, señor presidente.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, a favor.

Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

Aragón Carreño, a favor.

Camones Soriano (); Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco (); Aguinaga Recuenco (); Juárez Gallegos (); Juárez Gallegos (); Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, a favor.

La congresista Juárez Gallegos, manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma.

Juárez Gallegos, a favor.

Alegría García () .

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Chacón Trujillo, a favor. Considerar, por favor, mi votación.

Gracias.

La SECRETARIA TÉCNICA.— ¿Podría manifestar en reemplazo de qué congresista, congresista Chacón, Aguinaga o Alegría?

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Aguinaga.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La SECRETARIA TÉCNICA.— Ok, gracias, congresista Chacón.

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Aguinaga, por favor, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Se consigna el voto a favor de la congresista Chacón Trujillo, a favor en reemplazo del congresista Aguinaga.

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Barbarán, a favor.

Barbarán, a favor, en reemplazo de Alegría.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Se consigna el voto a favor de la congresista Barbarán Reyes, en reemplazo del congresista Alegría García.

En tal sentido, Chacón Trujillo, a favor.

Barbarán Reyes, a favor.

Lizarzaburu Lizarzaburu.

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Lizarzaburu Lizarzaburu, a favor.

Elías Ávalos.

El señor ELÍAS ÁVALOS (APP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Elías Ávalos, a favor.

Juárez Calle, Juárez Calle.

La congresista Juárez Calle, manifiesta su voto en contra a través del chat de la plataforma.

Juárez Calle, en contra.

Luna Gálvez (); Luna Gálvez (); Cerrón Rojas (); Cerrón Rojas (); Mita Alanoca.

El señor MITA ALANOCA (PL).— Mita Alanoca, en contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, en contra.

Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Muñante Barrios, a favor.

Herrera Medina.

La congresista Herrera Medina, manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma.

Herrera Medina, a favor.

Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— Abstención, Soto Palacios.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, en abstención.

Paredes Gonzales (); Paredes Gonzales (); Quiroz Barboza (); Quiroz Barboza.

El señor QUIROZ BARBOZA (BM).— En abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Quiroz Barboza, en abstención.

Williams Zapata.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Williams Zapata, a favor.

Cavero Alva.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cavero Alva, a favor.

Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— En contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cutipa Ccama, en contra.

Valer Pinto (); Valer Pinto (); Morante Figari (); Morante Figari.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, a favor.

El congresista Paredes Gonzales, manifiesta su voto en abstención a través del chat de la plataforma.

Paredes Gonzales, en abstención.

Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— En contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Flores Ramírez, en contra.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ RAMOS VDA. DE NÚÑEZ (HYD).— A favor, pero con reserva.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Echaíz de Núñez Izaga, a favor, pero con reserva.

Luque Ibarra.

La señora LUQUE IBARRA (BDP).— En contra de la ley de impunidad.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Luque Ibarra, en contra.

Segundo llamado a los congresistas titulares de la comisión:

Camones Soriano (); Luna Gálvez (); Cerrón Rojas (); Valer Pinto ();

DOCUMENTO DE TRABAJO

Se va a llamar a los congresistas accesorios de los congresistas titulares que no han respondido el llamado.

Alva Prieto (); Espinoza Vargas (); Tello Montes (); Bellido Ugarte (); Cruz Mamani (); Montalvo Cubas (); Amuruz Dulanto (); Jeri Oré (); Cordero Jon Tay (); Azurín Loayza.

El señor AZURÍN LOAYZA (SP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Azurín Loayza, a favor, en reemplazo el congresista Valer Pinto.

Azurín Loayza, a favor.

Señor presidente, habiendo culminado con el registro del sentido de votación de los señores congresistas, se tiene registrado 15 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.

El señor CRUZ MAMANI (PL).— Cruz Mamani, en contra.

Cruz Mamani, en contra.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Se registra el voto en contra del congresista Cruz Mamani.

Cruz Mamani, en contra.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

La SECRETARIA TÉCNICA.— En reemplazo, sería en reemplazo del congresista Cerrón Rojas, que es el titular de su grupo parlamentario.

Cruz Mamani, en contra.

Con dicha consignación de voto se tiene registrado, señor presidente, 15 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.

El dictamen ha sido aprobado por mayoría.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, señores congresistas.

Conforme al registro de votos anunciado por la Secretaría Técnica, el dictamen ha sido aprobado por mayoría.

Como tercer punto de agenda, tenemos debate y votación de los predictámenes de control de los Decretos Legislativos 1638, 1642, 1678, 1687 y 1690, y de los Tratados Internacionales Ejecutivos, 180, 181, 198, 201 y 202.

Sí, adelante.

Tomando el valioso aporte de la Subcomisión de Control Político, presento a esta sesión los predictámenes correspondientes a los decretos legislativos mencionados que han sido emitidos en el marco de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo a través de la Ley Autoritativa 32089, publicada el 04 de julio de 2024, a través de la cual se delegó al Poder Ejecutivo la facultad legislar en materia de reactivación

DOCUMENTO DE TRABAJO

económica, simplificación y calidad regulatoria de actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

Asimismo, tenemos los Tratados Internacionales Ejecutivo 180, 181, 198, 201 y 202 que fueron ratificados por el Poder Ejecutivo en los años 2018 y 2019, cuya constitucionalidad ha sido analizada en el marco de los artículos 56, 57 y 118 de la Constitución y el artículo 92 del Reglamento del Congreso.

Cabe precisar que todas las normas antes señaladas fueron materia de análisis y emisión de informes previamente aprobados por la Subcomisión de Control Político.

En el caso de los decretos legislativos, los informes fueron aprobados en el periodo anual de sesiones 2024-2025 bajo la presidencia del congresista Arturo Alegría y respecto de los tratados internacionales ejecutivo los informes fueron aprobados en el periodo anual de sesiones 2023-2024 bajo la presidencia de la congresista Patricia Juárez.

A continuación, doy a conocer un breve detalle respecto a cada uno de ellos.

1. El Decreto Legislativo 1638, se emitió con el objeto de autorizar al Ministerio de Cultura la aprobación de tarifas diferenciadas para promover el acceso a los bienes inmuebles y prehispánicos del patrimonio cultural de la Nación y museos públicos.

2. El Decreto Legislativo 1642, se emitió con la finalidad de prorrogar el mandato de los Consejos Directivos de las Organizaciones de los Usuarios de Agua de sus comités de administración temporal y de otros órganos de similar denominación establecidos por la Autoridad Nacional del Agua hasta el 31 de diciembre del 2025.

3. Decreto Legislativo 1678, se emitió con el fin de establecer medidas que garanticen la continuidad del servicio público de transporte terrestre regular de personas que se presta en los corredores complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

4. El Decreto Legislativo 1687, se emitió con la finalidad de modificar los artículos 8, 15, 16, 27, 29, 36, 53 y 56, y la décima primera disposición complementaria final, incorporar los artículos 53A, 54B y 56A en el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, con la finalidad de fortalecer el marco normativo en materia migratoria.

5. Decreto Legislativo 1690, se emitió con el objeto de fomentar la simplificación de procedimientos administrativos relacionados a las actividades productivas y a la generación sostenible de empleo formal.

DOCUMENTO DE TRABAJO

En ese sentido, señores congresistas, realizada el examen de constitucionalidad de estos decretos legislativos, se concluye que cumplen con los parámetros constitucionales previstos para la legislación delegada, establecidos en el artículo 104 de la Constitución, esto es que el objeto del análisis no se encuentra referido a reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, ley de presupuestos y ley de la Cuenta General de la República, y no lesionan derechos fundamentales. Además, se tiene que los decretos legislativos se encuentran dentro del ámbito a la materia delegada y se han emitido dentro del plazo de la ley autoritativa. Del mismo modo han sido informados al Congreso de la República dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del Congreso.

Ahora paso a sustentar los predictámenes de los tratados internacionales ejecutivos.

1. El Tratado Internacional Ejecutivo N°180, denominado acuerdo entre la República Federal de Alemania y la República del Perú sobre cooperación técnica 2014, tuvo por objeto que el Gobierno de Alemania pueda poner a disposición del Gobierno peruano recursos humanos y prestaciones materiales.

2. El Tratado Internacional Ejecutivo N°181, denominado Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas, tuvo como objetivo crear un marco internacional para la simplificación y armonización de los procedimientos administrativos nacionales y regionales de registro de marcas.

3. El Tratado Internacional Ejecutivo N°198, que contiene el acuerdo de libre comercio entre la República del Perú y Australia, ha tenido como finalidad establecer una zona de libre comercio en los territorios de Perú y Australia.

4. El Tratado Internacional Ejecutivo N°201, que contiene el acuerdo sobre cooperación técnica y científica entre la República del Perú y Santa Lucía, tuvo como finalidad promover la cooperación técnica y científica entre las partes.

5. El Tratado Internacional Ejecutivo N°202, que contiene el acuerdo para la supresión de requerimiento de visa para portadores de pasaportes diplomáticos especiales entre la República del Perú y el Estado de Catar, tuvo como objetivo permitir a los nacionales de ambas partes salir, transitar y permanecer en el territorio de la otra parte.

Luego del análisis realizado de dichos tratados internacionales ejecutivos, se ha verificado que todos cumplen con los requisitos formales y materiales para su misión, puesto que no versan sobre materia de derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional, ni sobre obligaciones financieras del Estado. Asimismo, tampoco crean, modifican o suprimen tributos, ni exigen modificación o derogatoria de una ley, ni requieren medidas legislativas para su ejecución. Por otra parte, también

DOCUMENTO DE TRABAJO

se ha verificado que los referidos tratados ejecutivos han cumplido con el plazo de tres días útiles posteriores a su celebración de estos para que el Poder Ejecutivo dé cuenta al Congreso.

En tal sentido, esta comisión coincide con el análisis realizado por la Subcomisión de Control Político tanto a los decretos legislativos como a los tratados internacionales ejecutivos que he sustentado, **(12)** coincidiendo en todos los casos han cumplido con los parámetros constitucionales y reglamentarios para su emisión.

Habiendo culminado con la sustentación, pongo a vuestra consideración la aprobación de los diez predictámenes en los términos que acabo de sustentar.

Si algún congresista desea intervenir tiene el uso de la palabra, si no pasamos al voto, sugiriendo que la votación se realice en bloque.

No habiendo intervenciones se pone al voto los predictámenes de control de los Decretos Legislativos 1638, 1642, 1678, 1687 y 1690 y de los Tratados Internacionales Ejecutivos 180, 181, 198, 201 y 202 los cuales atendiendo a que todos fueron aprobados, previamente, por la Subcomisión de Control Político, solicito sean votados en bloque.

Señora secretaria técnica, proceda a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto.

La SECRETARIA TÉCNICA pasa lista para la votación nominal:

Con su venia, señor presidente.

Pasamos a llamar a los señores congresistas para recoger el sentido de votación en los predictámenes de control político a los que usted hizo referencia.

Rospigliosi Capurro.

El señor ROSPIGLIOSI CAPURRO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Rospigliosi Capurro, a favor.

Aragón Carreño.

El señor ARAGÓN CARREÑO (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Aragón Carreño, a favor.

Camones Soriano (); Aguinaga Recuenco (); Aguinaga Recuenco (); Juárez Gallegos (); Juárez Gallegos (); Moyano Delgado.

La señora MOYANO DELGADO (FP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Moyano Delgado, a favor.

Alegría García (); Alegría García (); Lizarzaburu Lizarzaburu.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Lizarzaburu Lizarzaburu, a favor.

Elías Ávalos.

El congresista Elías Ávalos, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma.

Elías Ávalos, a favor.

Juárez Calle (); Juárez Calle (); Luna Gálvez (); Luna Gálvez (); Cerrón Rojas (); Cerrón Rojas (); Mita Alanoca (); Mita Alanoca (); Muñante Barrios.

El señor MUÑANTE BARRIOS (RP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Muñante Barrios, a favor.

Herrera Medina.

La congresista Herrera Medina, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma.

Herrera Medina, a favor.

Soto Palacios (), Soto Palacios.

El señor SOTO PALACIOS (AP).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Soto Palacios, a favor.

Paredes Gonzales (); Paredes Gonzales (); Quiroz Barboza (); Quiroz Barboza.

El señor QUIROZ BARBOZA (BM).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Quiroz Barboza, a favor.

Williams Zapata.

El señor WILLIAMS ZAPATA (AP-PIS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Williams Zapata, a favor.

Cavero Alva.

El señor CAVERO ALVA (AP-PIS).— A favor.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Paredes Gonzales, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cavero Alva, a favor.

El señor PAREDES GONZALES (BM).— Paredes Gonzales, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Paredes Gonzales, a favor.

La congresista Juárez Calle, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma.

Juárez Calle, a favor.

Cutipa Ccama.

El señor CUTIPA CCAMA (JPP-VP).— Abstención.

DOCUMENTO DE TRABAJO

La SECRETARIA TÉCNICA.— Cutipa Ccama, abstención.

Valer Pinto (); Valer Pinto () .

La señora BARBARÁN REYES (FP).— Barbarán, a favor; Barbarán, a favor, disculpe.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Barbarán Reyes, a favor, en reemplazo del congresista Alegría García.

Barbarán Reyes, a favor.

La señora CHACÓN TRUJILLO (FP).— Chacón Trujillo, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Chacón Trujillo, a favor, en reemplazo de la congresista Juárez Gallegos.

Ah, perdone, por el congresista Aguinaga, perdón.

Chacón Trujillo, a favor, en reemplazo del congresista Aguinaga Recuenco.

Se da cuenta del voto a favor de la congresista Juárez Gallegos, a través del chat de la plataforma.

Juárez Gallegos, a favor.

Morante Figari (); Morante Figari (); Flores Ramírez.

El señor FLORES RAMÍREZ (BS).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Flores Ramírez, a favor.

Echaíz de Núñez Izaga.

La señora ECHAÍZ RAMOS VDA. DE NÚÑEZ (HYD).— A favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— A favor, la congresista Echaíz de Núñez Izaga.

Luque Ibarra.

La congresista Luque Ibarra, manifiesta su voto a favor, a través del chat de la plataforma.

Luque Ibarra, a favor.

El señor MORANTE FIGARI (SP).— Morante Figari, a favor.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Morante Figari, a favor.

Segundo llamado a los congresistas titulares de la comisión.

Camones Soriano (); Luna Gálvez (); Cerrón Rojas (); Mita Alanoca (); Valer Pinto () .

El señor MITA ALANOCA (PL).— Abstención, Mita, abstención.

La SECRETARIA TÉCNICA.— Mita Alanoca, abstención.

Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han respondido al llamado.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Alva Prieto (); Espinoza Vargas (); Tello Montes (); Bellido Ugarte (); Cruz Mamani (); Montalvo Cubas (); Amuruz Dulanto (); Jeri Oré (); Cordero Jon Tay, Luis (); Azurín Loayza (); Pazo Nunura () .

Señor presidente, habiendo culminado con llamado de sentido de votación se tiene registrado 20 votos a favor, cero en contra, dos abstenciones.

Los dictámenes de control político han sido aprobados por mayoría.

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, conforme al registro de votos anunciado por la secretaría técnica, los predictámenes de control se han aprobado por mayoría.

Como cuarto punto tenemos la sustentación del Proyecto de Resolución Legislativa 7912/2023-CR que propone la Resolución Legislativa que incorpora el artículo 69-A al Reglamento del Congreso de la República, sobre pedidos de opinión de autoría del congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu.

Dejo en el uso de la palabra al congresista Lizarzaburu, por el tiempo de diez minutos.

El señor LIZARZABURU LIZARZABURU (APP).— Bueno, estamos de buen humor después de haber aprobado este proyecto de ley que hace justicia a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, señor presidente, y a nuestros miembros de la Policía.

Por su intermedio, saludar a todos y a su vez sustentar mi iniciativa Nro. 7912/2023 presentada por quien habla en mayo de 2024 y que versa sobre la incorporación del artículo 69-A al Reglamento del Congreso de la República.

En ese sentido, señor presidente, es preciso indicar que a la fecha el Reglamento del Congreso de la República no contempla ni define algún artículo concerniente sobre los pedidos de opinión.

Por ello, consideramos necesaria su regulación e incorporación en el citado Reglamento.

Según el portal web de la Real Academia Española, define opinión como juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. Tomando en cuenta dicha definición debemos diferenciar la misma sobre el concepto de información, cuya referida academia describe como acción y efecto de informar.

Siendo así, el Reglamento del Congreso de la República detalla sobre pedidos de información lo siguiente:

Artículo 69.-

Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los congresistas ejercen su derecho de pedir información que consideren necesaria a los ministros y otras autoridades y

DOCUMENTO DE TRABAJO

órganos de la administración, a efectos de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención de los servicios públicos. Como podemos observar, ambas definiciones son distintas, aunque muchas veces las mismas son confundidas.

Por otra parte, hemos revisado aleatoriamente el tiempo de respuesta que se toman las entidades públicas en torno a las solicitudes de opinión que requieren las comisiones ordinarias del Congreso de la República.

Por ello, del análisis efectuado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, comprendido en el periodo anual de sesiones 2022-2023 referidos a los pedidos de opinión, presentamos el siguiente cuadro que pueden apreciar, que son fechas de respuesta siempre superiores a los quince días.

Como apreciamos podemos considerar también que en una de ellas a la fecha no respondió a la solicitud de opinión en una de ellas.

Al respecto resulta pertinente, señor presidente, que el plazo para responder los pedidos de opinión no exceda de los quince días hábiles, dado que emitir respuesta de forma extemporánea genera en algunas oportunidades que ciertos dictámenes elaborados por comisiones ordinarias del Congreso de la República, no cuenten con las opiniones técnicas de los entes especializados, perjudicando así a cierto sector de la población que requiere soluciones en el breve plazo posible.

Por ello, una respuesta de opinión oportuna definitivamente contribuirá al trabajo técnico y especializado que vienen realizando las mencionadas comisiones.

Por otro lado, debemos advertir que el Manual de Tramitación de los Pedidos de Información que formulan los congresistas a las distintas entidades públicas en su artículo 5 detalla lo siguiente:

Precisión. Las normas relativas a los pedidos de información no son aplicables a los pedidos de opinión que sobre los proyectos de ley remiten las comisiones ordinarias a los ministerios y otras dependencias públicas.

Por lo expuesto, señor presidente y apreciados colegas que nos siguen en remoto, nuestra propuesta de solución es a través del presente Proyecto de Resolución Legislativa, el cual incorpora el artículo 69-A al Reglamento del Congreso de la República en los términos siguientes:

Artículo 69-A.- Los pedidos de opinión son solicitudes formuladas por los presidentes de las comisiones ordinarias,

DOCUMENTO DE TRABAJO

especiales e investigadoras, mediante las cuales se pide al representante de la entidad o dependencia pública a emitir opinión sobre las proposiciones de ley, de resolución legislativa o determinado tema, según sea el caso.

Cuando los mencionados pedidos versen sobre proposiciones de ley, el plazo no puede exceder los quince días hábiles, bajo responsabilidad. Transcurrido el referido plazo se entenderá que no existe oposición.

En consecuencia, nuestra propuesta permitirá a las comisiones ordinarias y especiales a solicitar las opiniones necesarias a las entidades o dependencias públicas con el propósito de dictaminar las iniciativas de ley o de resoluciones legislativas con el sustento técnico adecuado, permitiendo la viabilidad de las propuestas para su posterior debate y posible aprobación por la representación nacional.

En el caso de las comisiones investigadoras podrán requerir las opiniones que estimen convenientes con el objetivo de clarificar determinado tema y así coadyuvar a sus objetivos previstos, tanto el Reglamento del Congreso de la República como en la Constitución Política del Estado.

Nada más, señor presidente, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— Bien, agradecemos al congresista Juan Carlos Lizarzaburu por la exposición.

Si algún congresista desea hacer uso de la palabra con la finalidad de realizar alguna pregunta o comentario puede solicitar en este instante el uso de la palabra.

No habiendo mayores intervenciones, señor presidente..

El congresista Lizarzaburu es demasiado elocuente.

Bueno, agradecemos la participación del congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien ha sustentado su proyecto en el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República.

El proyecto sustentado continuará con el trámite correspondiente.

Como quinto punto de agenda tenemos la sustentación del Proyecto de Ley 8873/2024-CR que propone la Ley que sanciona a los funcionarios por el incumplimiento del plazo establecido para la emisión de normas reglamentarias, de autoría de la congresista Patricia Chirinos.

Dejo en el uso de la palabra a la congresista Chirinos por el tiempo de diez minutos.

La señora CHIRINOS VENEGAS (RP).— Muchas gracias.

Sanciones por incumplimiento de plazos reglamentarios.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Muy buenos días con todos los colegas y presidente.

Quiero empezar agradeciendo al señor presidente por permitirme exponer el presente Proyecto de Ley Nro. 8873 que propone sancionar a los funcionarios del Poder Ejecutivo que incumplen los plazos establecidos para la emisión de normas reglamentarias.

Esta es una medida correctiva y necesaria para asegurar que las leyes que aprobamos en este Congreso sean aplicables en la práctica y no queden desnaturalizadas por la inacción o negligencia del Ejecutivo.

Esta propuesta normativa se enmarca en los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y responsabilidad de la función pública y busca fortalecer el control político y la rendición de cuentas en la administración del Estado.

Siguiente diapositiva, por favor.

Uno de los problemas más persistentes es la aplicación de las leyes en nuestro país, es la falta de reglamentación oportuna, sin reglamentos muchas leyes no pueden ejecutarse y, por tanto, los derechos que reconocen quedan sin protección real. **(13)**

Según la Defensoría del Pueblo, hasta el año 2022, el Ministerio de Salud tenía 11 leyes sin reglamentar dentro del plazo. Entre 2016 y 2022 se identificaron 79 normas legales que requerían reglamentación, de las cuales 64 superaron el plazo.

Además, el actual gobierno de la presidenta Boluarte tiene 33 normas sin reglamento, la cifra más alta en los últimos ocho años. Esta situación afecta directamente la implementación de políticas públicas, deteriora la seguridad jurídica y debilita la confianza ciudadana en el Estado.

Siguiente diapositiva.

Este proyecto modifica el artículo 13 de la ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporando dos nuevos numerales.

En primer lugar, se establece que el incumplimiento de los plazos para la aprobación de normas reglamentarias constituye una infracción constitucional, lo cual habilita al Congreso para ejercer su función de control político mediante la presentación de denuncias constitucionales contra los ministros responsables.

En segundo lugar, se fija la responsabilidad administrativa, civil y penal de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, retrasen injustificadamente la aprobación o publicación de los reglamentos que hacen operativas las leyes. Este mecanismo no sólo busca sancionar, sino también prevenir, promoviendo una cultura de cumplimiento en la función pública.

Siguiente diapositiva.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Para garantizar el cumplimiento de esta ley, se establece que la presidencia del Consejo de Ministros deberá presentar un informe semestral al Congreso sobre el avance en la reglamentación de leyes. Además, se dispone un plazo improrrogable de 30 días hábiles desde la entrada en vigencia de esta norma para que el Poder Ejecutivo emita los reglamentos pendientes.

De no hacerlo, se activarán las sanciones correspondientes. Esta medida introduce un sistema de vigilancia y seguimiento que evitará que las normas permanezcan indefinidamente sin aplicación por falta de voluntad política.

Siguiente diapositiva.

Esta propuesta no implica ningún gasto adicional para el Estado, no requiere personal ni presupuesto adicional. En cambio, sus beneficios son múltiples. Mejora la eficiencia de la administración pública, fortalece el Estado de derecho y aumenta la confianza ciudadana.

Al establecer consecuencias claras y reales para los funcionarios que incumplen, se garantiza que las leyes no solo se aprueben, sino que entren en vigor efectivamente. Asimismo, se promueve una gestión más transparente, responsable y alineada con el interés público.

Colegas, esta iniciativa legislativa no es contra ningún gobierno en particular. Es una propuesta a favor del cumplimiento de la ley, de la institucionalidad y del respeto al trabajo legislativo que realizamos en este parlamento. Las leyes que aprobamos deben cumplirse y, si no se reglamentan, si se ignoran, debemos tener los mecanismos para exigir esa responsabilidad. Por eso les pido con convicción que apoyen este proyecto de ley. No más leyes dormidas, no más normas sin reglamento. Es hora de poner orden desde el Congreso.

Muchas gracias, señor presidente y colegas.

El señor PRESIDENTE.— Gracias, congresista Chirinos.

Si algún congresista desea hacer uso de la palabra. Si no hay intervenciones, agradezco la participación de la congresista Patricia Chirinos, que ha sustentado su proyecto en el marco de lo establecido en el primer párrafo del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. Este proyecto continuará con el trámite correspondiente.

Como sexto y último punto de la agenda, tenemos la sustentación del Proyecto de Ley 10669/2024-CR, que propone la Ley de desarrollo constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas, de autoría del congresista Elvis Vergara.

Dejo en el uso de la palabra al congresista Vergara por el tiempo de diez minutos. Adelante, congresista.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Bueno, lamentablemente no está el congresista Vergara.

Bueno, no habiendo otro punto que tratar, en el caso de que no se amplíe la legislatura, esta sería nuestra última sesión del presente periodo de sesiones.

En tal sentido, de concluir esta legislatura y mi periodo como presidente de esta importante comisión. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por el arduo trabajo, la entrega y el compromiso que han demostrado en cada sesión y en cada debate, especialmente al congresista Luis Aragón, vicepresidente de la comisión, que siempre ha estado presente presencialmente en las sesiones de esta comisión.

Nos ha tocado enfrentar retos complejos, especialmente en materia electoral, donde hemos asumido la responsabilidad de fortalecer la democracia y garantizar que los procesos electorales venideros del año 2026 se realicen con transparencia y absoluta legitimidad, brindando confianza a la ciudadanía y asegurando el respeto irrestricto a la voluntad popular. Cada uno de ustedes ha aportado con su experiencia, su criterio y sobre todo con su vocación de servicio al país.

Gracias por su responsabilidad y por haber sabido mantener debates alturados en los que las ideas y el interés común han prevalecido por encima de las diferencias ideológicas. Ha sido un honor presidir esta comisión y compartir con ustedes este camino; mi gratitud y reconocimiento para cada uno de ustedes.

No habiendo otros puntos que tratar, se consulta la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hay oposición, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12 y 55, se levanta la sesión.

Muchas gracias.

-A las 12:55 h, se levanta la sesión.